



UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO  
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS



## **TESIS**

# **“Análisis de las eximentes de responsabilidad penal en el uso de la fuerza a través del manejo del arma de fuego en el accionar policial.”**

**Asesor:**

**Dr. Balcázar Zelada, Jose María**

**Autor:**

**Bach. Montenegro Becerra, Junior Ulises**

**PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO**

**LAMBAYEQUE, 2020**

**Tesis denominada “Análisis de las eximentes de responsabilidad penal en el uso de la fuerza a través del manejo de arma de fuego en el accionar policial” presentada para optar el TITULO PROFESIONAL DE ABOGADO por:**

.....  
**Bach. Montenegro Becerra Junior Ulises**  
**Autor**

.....  
**Dr. Balcázar Zelada Jose María**  
**Asesor**

**APROBADO POR:**

.....  
**Abog. Martines Oblitas Carlos Manuel**  
**Presidente**

.....  
**Mag. Ponte Durango Ricardo**  
**Secretario**

.....  
**Mag. Cevallos de Barrenechea Carlos**  
**Vocal**

## **Dedicatoria**

*Dedico esta tesis a mis padres Ulises Montenegro Fernández y Magaly Victoria Becerra Rojas, los cuales siempre me apoyaron incondicionalmente en la parte moral y económica para poder llegar a ser un profesional a carta cabal.*

*A mis hermanos Paolo Ulises Montenegro Becerra y Ulises Luciano Montenegro Becerra y demás familiares en general que siempre me brindaron su constante apoyo día a día en el transcurso de cada año de mi carrera de universitaria.*

*A mis abuelos Samuel y Custodio que desde el cielo me han guiado para poder esforzarme y llegar hasta la etapa final de este proceso.*

*A mis abuelas, Aurora y Soledad por estar siempre presentes en cada paso que doy en la vida.*

*A mi novia Zukeydi Lazo Briceño y mi hijo Thaiel Montenegro Lazo, por estar junto a mí en todo este proceso y así poder culminar este trabajo de investigación.*

## **Agradecimiento**

*Agradecer el amor incondicional brindado por mis grandiosos padres, por la dedicación y paciencia que me dedicaban día a día, con el único propósito de que culminara mi etapa universitaria. Agradecer a dios sobre todas las cosas, por la salud y perseverancia hacia mi persona. Gracias a mis familiares y personas que siempre estuvieron conmigo como pilares fundamentales para el logro de mis objetivos planteados.*

## **Resumen**

La presente investigación busca analizar las eximentes de responsabilidad penal en relación al uso de la fuerza a través del manejo del arma de fuego en las acciones policiales, así mismo se hará referencia al principio de razonabilidad en los medios el cual sirve para interpretar a favor del personal policial involucrado en estas acciones y creará mecanismos procesales que no menoscaben el principio de autoridad policial. Asimismo con la creación de la Ley 31012°(Ley de Protección Policial), ya no se puede dictar mandato de detención preliminar judicial y prisión preventiva a un oficial de policía que en cumplimiento de su función constitucional, hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte a una persona, como fue el caso del sub oficial de tercera Elvis Miranda Rojas, es por ello que con la investigación se logrará determinar si es que se ha venido aplicando de forma correcta la eximente de responsabilidad estipulada en el Art. 20° inciso 11 del Código Penal y si a consecuencia de ello debería seguir vigente o debería ser derogada.

Es por ello que se plantea si los nuevos alcances normativos son suficientes para poder aplicar de manera eficaz el uso de la fuerza a través del manejo de armas de fuego en las acciones policiales, y en relación con ello vamos a proponer que dicha norma legal siga en vigencia, en tanto actúa de forma positiva dentro de nuestra sociedad.

**Palabras claves:** eximentes, responsabilidad penal, uso de la fuerza, arma de fuego, accionar policial

## **Abstrac**

*The present investigation seeks to determine the exemptions of criminal responsibility against the use of force through the handling of the firearm in police actions, it also refers to the fact that when the national police exercise their right to legitimate defense and Society, as established by law, the principle of equity in the media will be interpreted in favor of the police personnel involved and will create procedural mechanisms that do not undermine the principle. Authorities. However, according to this law, a preventive or preliminary jail can no longer be imposed on a police officer who, during the operation, causes death or injury to an intervening person, as was the case of Supreme Officer Miranda Rojas, in This situation, which is why the investigation is able to affirm whether with the applicability of the proposed regulations, the police action has been correctly established as an exemption from criminal responsibility against the use of force when handling a firearm. That is why it is proposed that if the new regulatory scope determines the use of force through the handling of firearms in police actions, then exemptions of criminal responsibility are established in the interposition of preventive detention measures to the police officers*

**Keywords:** *defense, criminal liability, use of force, firearm, police action*

## INDICE

CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÒGICOS.....	10
I. ASPECTOS DE LA INFORMACION. ....	11
1. REALIDAD PROBLEMÁTICA. ....	11
1.1. Planteamiento del problema. ....	13
1.2. Formulación del problema.....	16
1.3. Justificación e importancia del estudio.....	16
1.4. Objetivos.....	18
1.5. Hipótesis.....	18
1.6. Variables.....	19
1.7. Población y muestra.....	21
1.8. Métodos técnicas e instrumentos de recolección de datos .....	21
1.9. Análisis estadísticos de los datos.....	22
CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL .....	25
2.1. Antecedentes del problema. ....	26
2.1. Teorías relacionadas al tema. ....	31
2.1.1. Doctrina.....	31
2.1.1.1. El problema típico de la prisión preventiva y las causas de responsabilidad penal.....	31
2.1.1.2. Arma de fuego .....	37
2.1.1.3. El uso de armas o medios de defensa por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú .....	39
2.1.1.4. Estándar Internacional para el uso de la fuerza y armas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales .....	42
2.1.1.5. Capacitación del Estado .....	43
2.1.1.6. Excepcionalidad .....	44
2.1.1.7. Legislación comparada .....	45
2.1.1.7.1. En Ecuador .....	45
2.1.1.7.2. En Chile .....	46
2.1.1.7.3. En Colombia .....	47
2.1.2. Legislación .....	50

2.1.2.1. Marco legal para el cumplimiento del deber en las actuaciones policiales	50
2.1.2.2. La Ley N.º 31012, Ley de Protección Policial, y los derechos fundamentales del ciudadano. ....	53
2.1.3. Jurisprudencia.....	55
2.1.4. Caso SO3 PNP Elvis Joel Miranda Rojas .....	55
2.1.5. Motivos presentados por el Juzgado de Investigación Preparatoria y la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Piura....	56
2.1.6. Posición del juez de investigación preparatoria de Huancayo ..	57
CAPITULO III: RESULTADOS .....	60
I. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS.....	61
4.1. Resultados en Tablas y Figuras.....	61
CAPITULO IV: ANALISIS DE LOS RESULTADOS .....	71
V. CONCLUSIONES.....	76
VI. RECOMENDACIONES.....	78
BIBLIOGRAFIA .....	80
ANEXO .....	85

## **INDICE DE TABLAS**

Tabla 1.- El accionar policial es eficaz para el control interno del país	61
Tabla 2.- Uso de armas de fuego se aplica correctamente en las intervenciones policiales. ....	62
Tabla 3.- Eximir de responsabilidad penal al efectivo policial que utiliza su arma de fuego en el cumplimiento de su deber. ....	63
Tabla 4.- Actuar policial deba ser legítimo y justificado .....	64
Tabla 5.- Causa principal para eximir de responsabilidad penal es la legítima defensa.....	65
Tabla 6.- La prisión preventiva impuesta a efectivos policiales cuando utilizan arma de fuego en cumplimiento de su deber es de acorde al derecho .....	66



Tabla 7.- Interposición de la prisión preventiva vulnera el derecho a la libertad personal de los efectivos policiales. ....	67
Tabla 8.- La prisión preventiva viola los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional del Perú. ....	68
Tabla 9.- Se plantea derogar la eximente de responsabilidad penal que protege a la Policía Nacional del Perú cuando utiliza su arma de fuego en cumplimiento de un deber .....	69
Tabla 10.- Uso de la fuerza en las intervenciones policiales vulnera derechos fundamentales de las personas. ....	70

## INDICE DE FIGURAS

Figura 1.- El accionar policial es eficaz para control interno del país ..	61
Figura 2.- Uso de armas de fuego se aplica correctamente en las intervenciones policiales. ....	62
Figura 3.- Eximir de responsabilidad penal al efectivo policial que utiliza su arma de fuego en el cumplimiento de su deber .....	63
Figura 4.- Actuar policial deba ser legítimo y justificado.....	64
Figura 5.- Causa principal para eximir de responsabilidad penal es la legítima defensa.....	65
Figura 6.- La prisión preventiva impuesta a efectivos policiales cuando utilizan arma de fuego en cumplimiento de su deber es de acorde al derecho .....	66
Figura 7.- Interposición de la prisión preventiva vulnera el derecho a la libertad personal de los efectivos policiales. ....	67
Figura 8.- La prisión preventiva viola los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional del Perú. ....	68
Figura 9.- Se plantea derogar la eximente de responsabilidad penal que protege a la Policía Nacional de Perú cuando utiliza su arma de fuego en cumplimiento de un deber. ....	69
Figura 10.- Uso de la fuerza en las intervenciones policiales vulnera derechos fundamentales de las personas. ....	70

# **CAPITULO I: ASPECTOS METODOLÒGICOS**

## **I. ASPECTOS DE LA INFORMACION.**

### **1. REALIDAD PROBLEMÁTICA.**

Las principales eximentes de responsabilidad penal que pueden surgir o puedan ser aplicadas a los efectivos policiales se encuentran en el artículo 20° de Código Penal, encontrándose en este grupo, el miedo insuperable, el que obra por disposición de la ley y el que actúa en el cumplimiento de su función constitucional.

Asimismo, un ejemplo vivo del problema actual en el contexto de nuestra legislación es el caso emblemático del suboficial de tercera Elvis Joel Miranda Rojas, el cual fue advertido de un robo contra un transeúnte por parte de dos hombres que se encontraban en una mototaxi, en la ciudad de Piura y fue a perseguirlos. Pero cuando estaba persiguiendo a uno de ellos realizó cuatro disparos al aire con la finalidad de que el perseguido se detenga, sin embargo en el mismo instante el delincuente realiza un ademán de sacar un arma de fuego ante lo cual, el efectivo policial le disparó causándole la muerte. El atacante que tenía antecedentes penales falleció, el otro huyó. Sin embargo, el policía Elvis Miranda fue acusado por el delito de homicidio simple y abuso de autoridad, esto debido a que no se le halló ningún arma de fuego al occiso, y la representante de Ministerio Público Lydia Castillo planteó que el actuar policial no fue conforme a ley, habiendo tenido la intención de matar al delincuente que estaba huyendo. e. (Publimetro, 2019)

En este caso, se aplicó de manera excesiva la prisión preventiva para la investigación preliminar, habiendo existido una falta de evaluación y análisis de lo que establece el Artículo 8.3, literal a) del Decreto Legislativo 1186, porque dicha norma establece en qué casos se puede hacer uso efectivo del arma de fuego, como fue el caso del policía Elvis Miranda, quien utilizó su arma en defensa propia, sin embargo el Ministerio Público solicitó una medida de

prisión preventiva excesiva por el plazo de 07 meses, que fue aprobada por el Poder Judicial , vulnerando con ello sus derechos fundamentales, así como el daño a la función constitucional que realiza la Policía Nacional de Perú, no habiéndose analizado que hubo una respuesta de mitigación criminal y el efectivo policial actuó en el ejercicio legítimo de su deber.

Esta situación llevó a que se presentaran al Congreso hasta cuatro propuestas legislativas para corregir la vulnerabilidad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, los cuales fueron enviados a la Comisión de Defensa del Congreso, sin embargo ninguna tuvo un resultado favorable.

Asimismo vamos a tener en cuenta que el Acuerdo Plenario 05-2019 / CJ-116, que hace referencia a las medidas policiales con respecto a las eximentes de responsabilidad penal con el fin de garantizar que las normas propuestas prohíban las decisiones sobre la detención o prevención de policías que enfrentan tal situación; la creación también de una Procuraduría Pública Especializada en la Defensa Legal del Policía Nacional del Perú para la protección de la policía en el Ministerio del Interior; y reemplazar el criterio de proporcionalidad con la razonabilidad de los fondos para el beneficio del personal de la institución cuando deben intervenir en la protección de la comunidad.

Es decir, se hace referencia al hecho de que cuando la policía nacional ejerza su derecho a la legítima defensa en favor de la sociedad, según lo establece la ley, el principio de equidad en los medios de defensa se interpretará a favor del personal policial involucrado y creará mecanismos procesales que no menoscaben el principio de autoridad policial.

En esa misma línea, según la Ley n.º 31012 (Ley de Protección Policial) ya no se puede imponer detención preliminar judicial o prisión preventiva a un oficial de policía que, durante la operación, causa la muerte o lesiones a una persona que interviene, como fue el caso del sub oficial de tercera Miranda Rojas, en esta situación, es por ello que con la investigación se logrará determinar si se ha aplicado de forma correcta la normativa vigente , asimismo se analizará si la eximente de responsabilidad penal en relación al uso del arma de fuego en el accionar policial resulta ser positiva para nuestra sociedad y si con ello se ha logrado mitigar los actos criminales.

Por consiguiente se podría concluir que, en los casos donde se realiza el uso de la fuerza por parte de agentes de la policía con armas de fuego, estos actúan al amparo una protección legal reduciendo en un gran porcentaje los actos ilícitos cometidos por los delincuentes en nuestra sociedad. Asimismo esto no excluye la posibilidad de que los policías actúen al amparo de miedos insuperables al momento de efectuar su labor, razón por la cual esta investigación busca analizar también los efectos que ha tenido en la sociedad el accionar policial cuando se ha empleado sus armas de fuego, siendo relevante en especial los casos de Lambayeque y los casos más emblemáticos a nivel nacional.

### **1.1. Planteamiento del problema.**

Se tiene en consideración que las eximentes a la responsabilidad penal actúan en función a lo que menciona el art. 20 C.P. es así que el legislador determina que, entre estas defensas la que se aplica en determinados casos a los efectivos policiales es la que está contenida en el artículo 11º, la cual señala: “El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de Perú, que en cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas

u otro medio de defensa en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”.

Aparentemente, la finalidad del legislador con el término "eximente de responsabilidad penal" fue únicamente "agrupar" una sección en una situación que de alguna manera excluye el presupuesto material para un arreglo tripartito del delito, es decir atacar la existencia de más elementos, así como la acción, porque el término “responsabilidad penal” está estrictamente relacionado con la categoría de delito antijuricidad.

Sin embargo, es cierto también que en algunas intervenciones policiales estos puedan hacer uso de un movimiento reflejo, sin sentimiento indefinido ni fuerza física (esta última está expresamente prevista en el artículo 20.6 CP), y ello conllevaría a la exención de responsabilidad penal. Esto es una característica objetiva, sin embargo, nos centraremos también en los casos en los que existe la posibilidad de un contacto defensivo-agresivo y esto ocurre en el miedo insuperable y la ocurrencia de lesiones entre los participantes. (Peña Cabrera, 2015, p. 716)

Otro ejemplo en la legislación peruana en la Región de Lambayeque es el caso citado por Diario la República (2019), señalando que el fiscal Mario López Navarro solicitaba a 7 años al efectivo policial Evert Neizer Cueva Cueva (24), por los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves quien corría el riesgo de ir a la cárcel después de dispararle al ladrón que le robó su teléfono celular, sin embargo el Juzgado Penal ordenó el sobreseimiento de la investigación por existir una causa de justificación

Antes de la adopción de la Ley de Protección de la Policía, que modificó el art. 20 inciso 11 del Código Penal, era necesario llenar este vacío, que violaba directamente los derechos básicos de la

policía en el ejercicio de sus funciones constitucionales, porque, como en el caso de que los efectivos policiales usaban sus armas como una herramienta reguladora, en el marco de sus funciones, la fiscalía solicita a diestra y siniestra medidas gravosas como son en este caso una prisión preventiva, las cuales son medidas arbitrarias que en la mayoría de casos son aceptadas por los jueces del Poder Judicial.

En relación a la justificación de la causa, se debe tener en cuenta las “circunstancias eximentes que por determinadas razones excluyen la antijuridicidad o ilicitud de la conducta en principio típica que realiza en su parte objetiva el tipo positivo, indiciario de la antijuridicidad”. Asimismo, el hecho ilícito se convierte en uno “perfectamente lícito y aprobado por el ordenamiento jurídico”, debido a que el único elemento que establece que un hecho típico se encuentre permitido es “la presencia de un bien o interés que [...] haya de prevalecer sobre el lesionado o puesto en peligro”. (Muñoz & García, 2010, p. 309) (Cobo, 1996, p. 433)

Las razones de la justificación se expresan excluyendo por completo la contingencia de cualquier efecto legal (penal, civil, administrativa, etc.), y no solo por respeto al autor, sino que también lo ayudó o inspiró. (Basigalupo, 1999, pág. 352)

Así mismo dentro de los principios fundamentales que presenta la justificación es la no protección jurídica contra un acto justo, pues esta teoría se basa en la idea de que una acción justa se da por estar en una situación que la pone en riesgo a ella un tercero que refuerza la necesidad de actuar. (Bramont-Arias, 2008, p. 272)

Otro principio nos da a entender que ante “la actuación justificada no se impone ningún tipo de sanción”. De esta manera se establece

que a quien obra de manera injusta “no puede imponérsele una medida de seguridad o cualquier tipo de sanción, ya que su hecho es lícito en cualquier ámbito del ordenamiento jurídico”. (Muñoz & García, 2010, p. 309-310)

El tercer principio el cual es importante, establece que las causas de justificación determinan que se “declara el hecho como justificado, no interesa el análisis de la culpabilidad”, pues se tiene en consideración el actuar del agente el cual obró justificadamente, “el juzgador está exento de verificar la culpabilidad de agente, ya que esta solo es verificable luego de comprobada la antijuricidad de la conducta”. (Villavicencio, 2006, p. 533)

Y finalmente, se determina una convicción adecuada en relación con los miedos intangibles, el estado de necesidad externa y las razones que excluyen la culpa.

### **1.2. Formulación del problema.**

¿Se han venido aplicando de forma correcta y eficaz en el proceso penal peruano la eximente de responsabilidad penal consignada en el artículo 20 inciso 11 del Código Penal?

### **1.3. Justificación e importancia del estudio.**

La investigación se justifica por el hecho de que un sector minoritario de legisladores peruanos, solicitan que se analice a fondo y se debata la derogación del artículo 20 inciso 11 de Código Penal, esto porque dicha norma legal no se estaría aplicando de forma correcta en el proceso penal y más aún si ya existe el inciso 8 del mismo artículo que abarcaría los mismos supuestos legales.

Asimismo la importancia para desarrollar la presente investigación



es que en muchas oportunidades el miedo insuperable que ataca a los efectivos policiales cuando realizan intervenciones implica un miedo incontrolable inevitable, donde la teoría acreditada muestra en este punto que se trata de: "una situación basada en un mal real o imaginario que afecta a una persona". El miedo insuperable "crea un estado emocional de miedo debido a un hecho desagradable que provoca la reacción del sujeto", por lo que contamos con las protecciones aplicadas a las acciones policiales: la protección legal, el estado de la ficha técnica de necesidad y la legitimidad del ejercicio del deber esto excluye la ilegalidad. El miedo inaccesible, la necesidad de excluir y la obediencia adecuada de eliminar el crimen.

Asimismo la Ley n. ° 31012 (Ley de Protección Policial) ha prohibido el dictado de detención preliminar judicial y prisión preventiva contra agentes policiales que actúen en el cumplimiento de su función constitucional y causa la muerte o lesión de personas. Sin embargo existe un sector minoritario de país que señala que estas medidas son populistas, incoherentes, redundantes, contraproducentes y discriminatorias porque realizan arbitrariamente excepciones y abren el camino a la perversión de la norma consagrando carta abierta a la violación de derechos fundamentales, por lo que con la investigación vamos a demostrar y acreditar que estas normas legales, actúan de manera positiva dentro de la sociedad y deben seguir vigentes.

Por último no debemos dejar de lado el tema de la imposición de prisiones preventivas a efectivos policiales que resulten inmersos en este tipo de situaciones, teniendo en cuenta que dicha medida es una medida excepcional, la cual no puede ser aplicada de forma arbitraria vulnerando los derechos constitucionales de los efectivos policiales.

## **1.4. Objetivos.**

### **1.4.1. Objetivo General.**

Analizar si se aplican de manera correcta y eficaz las normas legales referidas a las eximentes de responsabilidad penal aplicadas en los efectivos policiales cuando hacen uso de la fuerza a través del manejo del arma de fuego y puedan causar algún tipo de lesión o muerte.

### **1.4.2. Objetivos Específicos.**

1. Analizar las eximentes de responsabilidad penal referidos al accionar policial.
2. Determinar los casos existentes relacionados a la aplicación de eximentes de responsabilidad penal a los efectivos policiales.
3. Examinar y describir los nuevos alcances normativos para determinar el uso de la fuerza a través del manejo del arma de fuego en el accionar policial.
4. Proponer la no derogación del art. 20.11 del CP, para una mejor aplicación legal y defensa de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú

## **1.5. Hipótesis**

**Si** los nuevos alcances normativas han sido creados para poder aplicar de forma eficaz el uso de la fuerza a través del manejo de armas de fuego en las acciones policiales **entonces** se llega a establecer que las eximentes de responsabilidad, en este caso la del art. 20.11 del Código Penal será suficiente para regular las acciones policiales que lesionen la vida de una persona.

## **1.6. Variables**

### **Variable Independiente**

La aplicación del art. 8.3 del D.L. N.º 1186

### **Variable dependiente**

Eximentes de responsabilidad penal

### **operacionalización**

<b>Variables</b>	<b>Definición Conceptual</b>	<b>Dimensiones</b>	<b>Indicadores</b>	<b>Ítem / Instrumento</b>
<p><b>V. Independiente</b></p> <p>La aplicación del art. 8.3 del D.L. N.º 1186</p>	<p>Esto muestra que a los agentes de la Policía Nacional del Perú se les permite usar sus armas solo cuando sea absolutamente necesario y solo cuando las medidas menos extremas sean inadecuadas, permitiendo el uso extraordinario de la fuerza letal en situaciones establecidas.</p>	<p>Legítima defensa</p> <p>Grave amenazas</p> <p>Peligro Real</p>	<p>Hecho punible</p> <p>Valoración de la gravedad</p> <p>Lesiones Graves</p>	Encuesta
<p><b>V. Dependiente</b></p> <p>Eximentes de responsabilidad penal</p>	<p>Las razones para justificar la ilegitimidad son: protección jurídica, legitimidad de necesidad, ejercicio legal del deber; Así como las razones que excluyen la culpa: estado de culpa pasado esencial, miedos inciertos y convicción adecuada</p>	<p>Actuar Policial</p> <p>Miedo insuperable</p> <p>Obediencia debida</p>	<p>Principio de equidad</p> <p>Eximente de culpabilidad</p> <p>Mecanismos procesales</p>	

### **1.7. Población y muestra**

**Población:** La población es la sinceridad de todos los que quieren investigar, hay abogados penalistas en la investigación actual entre la población, así como también especialistas en derecho penal.

**Muestra:** La muestra en la investigación se tomará una parte de la población en relación a los Abogados especialistas en Derecho Penal la cual se basada en una encuesta de 10 preguntas.

### **1.8. Métodos técnicas e instrumentos de recolección de datos**

#### **1.8.1. Métodos**

**El Método Inductivo:** Parte de lo particular para llegar a lo general. Análisis de caso por caso en relación al tema de investigación.

**El Método Deductivo:** Parte general para lograr lo especial.

#### **1.8.2. Técnicas**

**Encuesta.** - El cuestionario, que se aplicará a los abogados penalistas de la ciudad de Chiclayo, se utilizará para obtener una opinión sobre la problemática planteada.

#### **1.8.3. Instrumentos**

**Cuestionario.** - La herramienta se utilizará en tecnología de encuestas y ayudará a recopilar información de los abogados penalistas de la ciudad de Chiclayo que ayudarán a investigar el caso.

### **1.9. Análisis estadísticos de los datos**

Técnicas de recolección de datos y herramientas aplicadas a los datos obtenidos por la aplicación, conocedores o recursos ya mostrados. Serán analizados e incluidos en el trabajo de investigación como información importante que contradice la idea con la realidad. El porcentaje de datos recopilados estará sujeto a presión para presentarse como búsquedas en forma de tablas, gráficos estadísticos.

#### **Forma de análisis de las informaciones**

En relación a la información presentada como resumen, se realizarán valoraciones objetivas, tablas, gráficos. La inferencia relacionada con la información en el campo de las variables cruzadas en una sub hipótesis dada se utilizará como un compuesto para comparar esa sub hipótesis.

El resultado de la prueba de cada hipótesis (que puede ser una prueba completa, una prueba parcial y una contradicción o una interferencia completa) será la base para una conclusión parcial (es decir, tendremos muchas conclusiones parciales de la hipótesis realizada).

La conclusión parcial, por otro lado, se utilizará como premisa para probar la percepción global. Los resultados del examen de la hipótesis global (que pueden ser tanto evidencia completa, evidencia parcial y refutación u objeción total).

### 1.9.1. Criterios éticos

En función a los criterios que establece Belmont (1979) en su informe sobre “Principios éticos y normas para el desarrollo de investigación que involucran seres humanos” utilizaremos los siguientes:

**Autonomía:** Es la capacidad de pensar en los objetivos personales de las personas y trabajar con las decisiones que pueden tomar.

**Beneficencia:** "Hacer el bien": la obligación moral de trabajar por el bien de los demás. Cura lesiones y promueve el bienestar o el bienestar. Esta es una regla privada y no existen sanciones legales por incumplimiento.

**Justicia:** Igualdad en la distribución de cargas y beneficios. El criterio para juzgar si una acción es moral desde el punto de vista de la justicia es juzgar si la acción es justa o no.

### 1.9.2. Criterios de rigor científico

De acuerdo a lo que menciona Hernández y otros (2003, p. 242) la validez se refiere a la medida en que el dispositivo mide realmente la dimensión que desea medir y se puede dividir en criterios de verificación de material, verificación de diseño y validación.

**Fiabilidad o consistencia.-** La confiabilidad se refiere a la repetibilidad del estudio, es decir, un investigador utiliza métodos o estrategias de recopilación de datos similares a los de otro y logra resultados similares.

**Validez.-** La evaluación se refiere a la correcta interpretación de los resultados y se convierte en el soporte básico de la investigación cualitativa.

**Credibilidad o valor de la verdad.-** El criterio de plausibilidad o valor de verdad, también llamado verdades, es un requisito importante porque permite la demostración de hechos y experiencias humanas explicados por el sujeto.

**Transferibilidad o aplicabilidad.-** La migración o aplicabilidad incluye la transferibilidad de los resultados de la investigación a otros contextos.

**Consistencia o dependencia.-** Este criterio, conocido por su duplicación, se relaciona con la coherencia de los datos.

**Conformabilidad o reflexividad.-** La consistencia reconoce el rol del investigador en el trabajo de campo y le permite controlar las limitaciones y limitaciones de su área de toma de decisiones o posibles revisiones emitidas por el evento u organizaciones participantes.

**Relevancia.-** La relevancia permite evaluar el logro de los objetivos marcados en el proyecto e indica que al final se obtuvo un mejor conocimiento sobre el evento, que el contexto tuvo un impacto positivo en, por ejemplo, un cambio de actividad o actividades y casos de participación.



## **CAPITULO II: MARCO CONCEPTUAL**

## **2.1. Antecedentes del problema.**

### **Internacionales**

Cornejo Zapata María Baldramina & Cajas Pacheco Edison Xavier (2010), en su conclusión establece:

*“La mayoría de pobladores dicen que una persona es inocente mientras no se declare su responsabilidad, a pesar que no conocen de esta base legal consagrada en la Constitución de la República del Ecuador por la falta de preparación, de tal manera que dan esta respuesta por simple deducción.”*

Pineda Arteaga César Augusto (2005), en su conclusión menciona: *“Se establece la importancia de distinguir la diferencia entre causas de inculpabilidad y causas de justificación, lo cual implica una mejor concepción del derecho penal en su parte general”.*

Briceño Jesús Alberto (2012), en su conclusión expresa:

*“En cualquier situación el individuo tiene derecho a rechazar con fuerza la agresión injusta contra sus bienes o valores, en el caso que el estado no pueda acudir en su defensa. Por ello, la legítima defensa es un conflicto de intereses que se plantea en determinadas situaciones, en el cual el interés del violentado debe prevalecer sobre el interés del agresor injusto, en la extensión y con las limitaciones que la ley impone”*

Ruiz Ortiz Salvador (2015), en su conclusión informa:

*“La LOFCS dedica un capítulo al desarrollo de los principios generales sobre la detención y el uso de la fuerza, si bien restringe su limitación a la concurrencia de proporcionalidad, congruencia, necesidad y oportunidad. Se trata de conceptos que, aunque pueden ser suficientemente interpretados en el ámbito doctrinal, lo cierto es que su contenido esencial no llega a las bases policiales. Esta ley no los define, por lo que queda a la interpretación personal, institucional o jurisdiccional su alcance. Esto conlleva un serio déficit formativo que obliga a realizar continuas reinterpretaciones de su significado, lo que a su vez genera auténtica inseguridad jurídica para quienes han de aplicar la coerción o la detención en el ejercicio de sus funciones.”*

## **Nacionales**

Ugaz Heudebert Juan Diego (2019), en su conclusión indica:

*“Respecto al exceso de los subordinados, existen dos supuestos. El primero se da cuando la orden es lícita y el subordinado obra ilícitamente. En este caso, si el superior imparte una directiva lícita y el subordinado obra ilícitamente, aquél no será responsable penalmente por el comportamiento de su inferior jerárquico, siempre y cuando la ley no le exija controlar el correcto cumplimiento de la orden. En cuanto al segundo supuesto, cuando el acto excesivo de los subordinados guarda relación con lo impartido, el superior ha de responder por estos excesos al igual que sus inferiores jerárquicos. Situación distinta es cuando los excesos de los subordinados constituyen hechos punibles independientes y*

*sin relación con lo ordenado. En estos casos el superior no responderá penalmente”.*

Yvancovich Vásquez Branko Slavko (2017), en su conclusión señala:

*“Considero que es necesario que los casos de participación en una autopuesta en peligro y de heteropuesta en peligro consentida deben ser analizados conforme las características del caso concreto y sobre la base criterios específicos a este tipo de conductas”.*

Saavedra Trujillo Rosner Jonny (2013), en su conclusión menciona:

*“Los efectos que estas causas de justificación causan en el derecho penal, así como desarrollar las definiciones de los requisitos para que concurran en el hecho objetivo. Por lo cual: corresponde previamente desarrollar desde el ámbito de la doctrina penal peruana las causas de justificación de manera general, con el fin de ubicar el estado de necesidad previsto en los incisos mencionados”.*

Rivera Barrantes Daniel Enrique (2016), en su conclusión expresa:

*“Existe una falta de capacidad del Estado para prevenir y controlar adecuadamente los conflictos en el país; por lo cual, el Estado debe estar preparado para encauzar la energía del cambio hacia la generación de instituciones estatales sólidas y democráticas que puedan ser catalizadoras de esfuerzos conjuntos para trabajar las causas estructurales de la*

*conflictividad, implementando Políticas Publicas adecuadas para el tratamiento de los conflictos socio ambientales.”*

## **Local**

Muñante Barrios Alejandro (2017), en su conclusión determina:

*“La aplicación del artículo 20 del código penal y el trastorno mental transitorio causado por drogadicción y ebriedad en las sentencias emitidas por el tribunal constitucional de la ciudad de lima adolece de empirismos aplicativos e incumplimientos; que están relacionadas y se manifiestan por el hecho de presenciarse desconocimiento de los planteamientos teóricos y las normas de parte de los responsables y la comunidad jurídica, siendo necesario recurrir a las experiencias exitosas.”*

Arévalo Lozano Luis Jherxon & Baila Pomachari Rubén Dario (2015), en su conclusión expresa:

*“La Reducción de la Capacidad Penal a 16 Años de edad en el Código Penal Peruano, el cual se ve afectada por empirismos normativos y discrepancias teóricas; que están relacionados causalmente y se explican, por el hecho de que no se conoce o no se ha aplicado bien algún Planteamiento Teórico, especialmente algún concepto básico; o, por tenerse en cuenta las Normas que se encuentran redactadas de manera empírica, además porque no se tiene en cuenta como experiencia exitosa a la Legislación Comparada de algunos países, la cual puede ser utilizada como referencia para subsanar y modificar las deficiencias del artículo 20 inciso 2 del Código Penal”.*

Carlos Ordoñez Juan (2016), en su conclusión señala:

*“Actualmente en el ordenamiento jurídico peruano, a través de la Ley N° 30151, establece el eximente de responsabilidad penal a los Miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, que en el ejercicio de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa cause lesiones y la muerte; sin embargo en dicha norma no se regula en forma expresa en observancia del Principio de Legalidad y Tipicidad que sucede cuando los Miembros de la Policía Nacional del Perú en el ejercicio de su deber y con uso de sus armas y otros medios de defensa actuando de manera arbitraria, negligente o ilegal causen lesiones y la muerte a la víctima; situación que deja abierta la posibilidad de que se efectúen diversas interpretaciones antojadizas que generen impunidad a dichos efectivos policiales, lo cual se encuentra proscrito en el ámbito penal, si se tiene en cuenta que el Derecho a la Vida es un bien jurídico de relevancia constitucional.”*

Cari Huaccachi Darwin Dario (2017), en su conclusión determina:

*“La intervención del efectivo policial de la Comisaría de San Martín de Porres que asume los casos de delito de flagrancia delictiva resulta ineficaz por las siguientes razones: desconocimiento de la norma específica, del Protocolo de actuación policial, por falta de recursos y la logística necesaria y adecuada para realizar las diligencias correspondientes. Esa inadecuada actuación genera una doble consecuencia jurídica que son: 1) invalidar la actuación policial y archivar el proceso por no seguir el debido proceso o no respetar el Protocolo; 2) vulnerar derechos fundamentales como la libertad personal y la presunción de inocencia.”*

## **2.1. Teorías relacionadas al tema.**

### **2.1.1. Doctrina**

#### **2.1.1.1. El problema típico de la prisión preventiva y las causas de responsabilidad penal.**

El principal objetivo de las diversas medidas drásticas de carácter individual que rigen el reglamento de nuestro proceso penal es certificar que el imputado se encuentre presente ante el tribunal en el proceso penal. Tal cual hace mención el autor, Maier pues lo define como “aquellas medidas restrictivas o privativas de la libertad personal, que pueden imponer los órganos jurisdiccionales en sus diferentes jerarquías en perjuicio del imputado con la finalidad de asegurar el éxito del proceso penal” (Maier, 1982, p. 127).

Asimismo, San Martín Castro, considerado como uno de los mejores tratadistas peruanos, establece que “la prisión preventiva como medida cautelar garantiza la efectividad de la potestad persecutoria del delito, a través del cual el Estado ejerce su potestad punitiva donde se sanciona al culpable y se indemniza al agraviado” (San Martín, 2014, p. 780)

En el caso de la libertad personal, el TC ha determinado una serie de disposiciones en la cual se restringen la libertad del imputado interponiendo una medida cautelar, que luego surge: a) En estos casos debe prevalecer la libertad individual, ya que sería el caso contrario, violando el principio informativo, b) derechos constitucionales como la libertad individual y la presunción de inocencia. (TC, 2004, Expediente N.º 731-2004-HC/TC)

Una de las instituciones más criticadas por la sociedad y los abogados es la prisión preventiva, debido a que es un actuar más

criticado por el orden de cualquier proceso y, en el caso de Perú, es un factor trascendente. Al publicar decisiones judiciales, los medios de comunicación tienen un papel fundamental el cual es influir en las decisiones de algunos jueces. Predomina el abandono de la libertad personal de una persona que se supone que es inocente. Es así que durante los últimos años, las normas del régimen de detención preventiva se han modificado en muchos casos y su contenido y estudio es objeto de un debate continuo. Hoy hemos notado que la prisión preventiva no sirve como una precaución sino como un castigo propuesto.

La detención debe considerarse una excepción a la supresión de las medidas coercitivas de carácter individual y su estudio debe perseguirse con estrictos motivos preventivos y punitivos; es decir, se utilizará únicamente cuando sea absolutamente necesario y con el consentimiento del sesgo de la acción, cuando en este caso el presunto autor del delito, sea testigo del riesgo de persecución (riesgo de fuga y obstrucción de la actividad) en prisión.

La situación paradójica que tenemos hoy es que la tipología se puede discutir en una sesión de detención al considerar el primer presupuesto, que consideraré el presupuesto debido a que no pasa por un filtro principal, otros presupuestos perderán su necesidad ideal. El art. 268 del nuevo CPP sugiere que debe haber muchos elementos buenos y serios de persuasión, mientras que cualquier comisión criminal que vincule al acusado como el autor o su cómplice puede determinarse adecuadamente. Asimismo, entre los distintos cargos de la Corte Suprema, el considerando N.º 18 de la Casación N.º 626-2013-Moquegua muestra a continuación:

“El denunciado informará de los hechos y argumentará en la sesión de detención. La intervención del imputado se basa en el material tomado [elementos de persuasión] que sustentan sus



declaraciones. El juez otorga a la defensa la palabra para que diga lo que se necesita. Dado que la función del grupo jurisdiccional es realizar audiencias, obtener información y emitir resoluciones orales y escritas, se debe jugar un papel protagonista de los derechos en discusión para evitar desviaciones que no se adapten de manera natural en la audiencia, brinden saneamientos, pero también poder. Como aceptar pruebas restringidas para excluir o discutir violaciones de irregularidades esenciales, que están protegidas por razón de derechos, redundancia o justificación.

De acuerdo a lo que se analiza en la Casación N.º 564-2016 Loreto:

La escena del crimen es una hipótesis de detención, cuyo alcance está determinado no solo por la perspectiva requerida [...], sino también desde el punto de vista procesal [...]. Desde este punto de vista, en relación al análisis de la posible ejecución de un delito, este drástico paso debe ser evaluado de acuerdo con los criterios del principio de imposición objetiva y subjetiva. [...] La Sala Superior, al emitir la resolución final, no proporcionó una base adecuada para su decisión, lo que permite enfocarse principalmente en la trascendencia jurídica penal de la conducta del imputado. Es autónomo de lo que han desarrollado los propietarios únicos. (Casación N.º 564-2016)

En el caso de Edwin Oviedo mediante el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria señala lo siguiente:

En principio, corresponde determinar si el juez de instrucción está facultado para pronunciarse sobre la legalidad de los elementos sentenciadores aportados por el demandante durante la audiencia de prisión preventiva. Al respecto, hay personas que señalan que esto no es posible en esta etapa del proceso porque no es prueba, que tiene una sola posibilidad que tiene en la etapa de audiencia. Así mismo, el criterio de que el juez de instrucción

autoriza al juez a investigar la legitimidad de los actos de investigación previstos en apoyo de la medida de detención o los elementos de la sentencia, salvo que este criterio pueda ser el criterio a considerar. Cubre los mismos requisitos que se presentan cuando se establecen pruebas en sí.

En función al caso Los Cuellos Blancos del Puerto, el juez instó a los defensores jurídicos y técnicos de los imputados a incidir en el sobreseimiento de las alegaciones del Ministerio Público sobre la característica, razón por la cual la mayoría de los jueces dieron la razón para no aplicar a la Casación N.º 626-2013 Moquegua, ya que esta última resultó inconstitucional por no cumplir con los parámetros fundamentalistas y legales definidos en la prisión preventiva.

Con respecto a la sesión de prisión preventiva realizada contra del suboficial Elvis Miranda Rojas, el código de conducta elaborado en el marco de la imposición de esta medida cautelar, como los hechos se desarrollan en el marco de la ley (principio de fe). Permiso para realizar un comportamiento social adecuado. Sobre los criterios permisibles de riesgos, el principio de confianza, la comisión indicada al garante y la restricción a la compensación no son más que desarrollos en la coherencia social. Estos criterios son parcialmente coherentes entre sí, por lo que pueden plantear dudas cuando se incluyen determinados casos (Günthe, 1997, p. 225).

El apoyo más eficaz que se puede dar a la teoría de la siembra objetiva es que cuando el concepto de "riesgo" se presenta de forma típica, este concepto se basa en una tipología que no se basa en la causalidad estándar de "riesgo" en esos casos. En ese sentido, Zaffaroni (1987) establece que:

“Que en los últimos años ha generado un gran aporte la moderna teoría de la imputación objetiva donde se inició, en Alemania, y alcanzó un notable auge doctrinario y jurisprudencial en Europa,

donde los órganos jurisdiccionales la han acogido en recientes decisiones que han marcado un éxito en su aplicación” (p. 277)

En función a ello se tiene que dentro de la imputación objetiva se presentan lo siguiente:

*1. Riesgo Aprobado: Es ponderar los intereses según la necesidad. Asimismo, es un requisito positivo de la infracción, no que estar en peligro permitido sea un motivo para estar justificado. Ser el resultado de la muerte, por ejemplo, no es socialmente inconsistente. Ejemplo: No se puede culpar al fabricante de automóviles por el simple hecho de su producción y cuando provocan un accidente de tráfico en un momento determinado tienen consecuencias fatales.*

*2. Principio de Fe: Ocurre en nuestra sociedad actual, debido a que se presenta con la distribución de los roles que tiene el ciudadano sobre las acciones de los demás, es así que se comienza con una hipótesis y con la idea de que otras organizaciones también son responsables y se puede confiar de acuerdo al rol asignador. Por ejemplo: cuando un médico cree que el anestesiólogo es la persona que aplicara una dosis completa para la operación, se ha demostrado que la teoría del riesgo percibido se basa en que el fenómeno no se basa en la naturaleza, sino en otras.*

No hablaremos de la falta de un hecho concreto, cuando el sujeto se comporte pensativamente, porque otros actuarán de acuerdo con las acciones responsables del mismo, aunque esté dentro de un área de riesgo válida. Cualquiera que se involucre en una conducta peligrosa, generalmente legal, se llega a confiar de las personas que actúan adecuadamente en función a las reglas preexistentes (Villavicencio, 2013, p. 327).

3. Prohibición de regreso: contribuye de manera existencial sobre la determinación de la responsabilidad penal, es la definición de un código de conducta formulado por un Ministerio Público, ya

que los procesos del imputado pueden ser a menudo lesivos, cotidianos, neutrales o triviales. No participa en delitos cometidos por terceros. Por ejemplo, el hombre que hizo el cuchillo no rasga el papel, aunque el comprador lo usa para matar a una tercera persona. Por otro lado, los miembros de la Policía Nacional pueden tener conocimientos especiales, por ejemplo, (Villavicencio, 2013, p. 329).

4. Elegibilidad de la víctima: La importancia de la víctima juega un papel fundamental ya que su castigo conductual es un factor clave en la comisión del delito. Por ejemplo, cuando una persona cruza una calle muy transitada y no usa la pasarela.

En cuanto al segundo frente, considero que se puede cuestionar la ilegalidad en una sesión de prisión preventiva, especialmente cuando el art. 20.11 del CP indica que han sido absueltos de responsabilidad penal “el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que, en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”.

El Proyecto de Ley N.º 3813/2018-CR, en función a las causas de justificación establece que:

Si esta conducta delictiva está asegurada por una causa justa, la cual da conocimiento sobre el ordenamiento jurídico la considera legítima, por lo que la acusación llega al nivel de tipología. En este sentido, la justificación actúa como una forma de sobreseimiento de la acusación, ya que la conducta exhibida en determinados casos amparados por las razones de justificación es considerada por ley, es decir, no se crea riesgo restrictivo sensible a sanción. Es criminal, pero sería un riesgo permisivo (pero solo en esas circunstancias especiales).

En términos de finalidad, esto implica una situación paradójica que reconoce su resolución a través de conductas que estarían prohibidas en otro contexto, es decir, serían objeto de desacato penal.

El Proyecto de Ley 3912-2018-CR dice sobre el cambio de art. 20.11 del CP, que mantiene la misma clasificación vigente, agregó en su parte final que las sanciones preventivas no se aplican cuando los miembros de la fuerza pública cumplen con su deber en el uso de sus armas reglamentarias.

No es necesario tener detalles sobre la prohibición preventiva si ya está establecida en el art. 268 del nuevo CPP y se explican diversas cajas registradoras emitidas por la Corte Suprema, por lo que no se debe involucrar el sistema de sanciones con el anterior, ya que sus motivos son completamente distintos. Existe una forma constitucional de asegurar que el imputado comparezca ante el tribunal, es decir, sirve tanto para fines procesales como punitivos, ya que es ilegal detener a una persona con fines preventivos o de represalia. La necesidad de prevenir.

#### **2.1.1.2. Arma de fuego**

No es común encontrar un arma de fuego en la escena de crimen cuando esta ha sido materializada por mano ajena, pero sí es cotidiano hallar un arma de fuego en la escena de crimen cuando esta ha sido concretada por la propia víctima: nos estamos refiriendo a los suicidios. En estos tipos de muerte es la propia víctima quien realiza el atentado contra su vida. Muchas de estas personas suicidas buscan poner fin a sus vidas utilizando instrumentos letales como el arma de fuego.

Respecto del procedimiento que se sigue ante el encuentro de un arma de fuego, la Enciclopedia de criminalística, criminología e investigación señala:

El arma de fuego luego de haber sido objeto de un estudio científico se convierte en una evidencia física y puede demostrar relaciones entre la víctima y el proyectil disparado por un arma específica o el arma y el sospechoso. La relación entre el proyectil homicida y el arma sospechosa es considerada una prueba clave en el juicio oral, de ahí que se deba prestar mucha atención a la manera en que se recolectan los indicios, ya que el abogado de la defensa podría argumentar fallos en el procedimiento que llevarían a anular la evidencia. Los encargados de recoger las armas en el lugar deben hacerlo con guantes y observar el estado del martillo y el gatillo antes de levantarlos, y si la seguridad está activa. Siempre deben asumir que el arma está llena.

El siguiente paso es descargarlo. En el caso de un revólver, es necesario determinar qué vainilla o tapas del tambor se golpean y dónde se encuentran. En la pistola, cuente y describa las municiones encontradas en el proveedor o rifle y si hay alguna en la habitación. Los guantes deben usarse y tomarse por guantes o colillas. No deben tocar el gatillo ni el cañón, ya que los expertos han tomado huellas dactilares del primero y restos de pólvora del segundo. Todas las piezas, de acuerdo a su tamaño, se envolverán en bolsas de papel; no se recomienda usar algodón porque la muestra puede tener impregnado algún fluido corporal, tratándose de disparos a corta distancia -retrosalpicadura- o restos encefálicos. Luego se depositarán dentro de una bolsa, o mejor aún, en una caja de cartón con pequeños orificios para que la muestra tenga ventilación -respecto a las altas temperatura o humedad del

lugar original de recolección-, como se trata de un metal el arma puede sufrir cambios de oxidación y deteriorar las muestras derivadas.

La pistola es manipulada por partes puntiagudas para evitar borrar huellas latentes y rastros de muestras de rastros. Además, el experto debe registrar la posición de los mecanismos de disparo - martillo y gatillo, choque y tipo de seguridad-, absteniéndose de introducir elementos extraños en su boca; es incorrecto introducir un lápiz o varilla por el cañón, dado que podría destruirse la evidencia allí alojada. Si es un revólver se numeran los alvéolos sitio donde se alojan los casquillos percutidos-, tomando como primero el que se encuentre alineado con el cañón siguiendo las manecillas del reloj. El investigador debe anotar también el número de serie y registro del arma con fines comparativo y de identificación (Morales, 2015, pp. 823 - 824).

#### **2.1.1.3. El uso de armas o medios de defensa por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú**

Sus armas u otros medios de protección se utilizan habitualmente en el Decreto Legislativo n.º 1186, el Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, su reglamento (D.S. n.º 012-2016-IN) y d. NR. 1095 sobre el establecimiento de reglas para el empleo y uso de la fuerza por parte de las fuerzas armadas en territorios nacionales.

Para efectos de la presente investigación, nos enfocaremos también en el Decreto Legislativo n.º 1186, porque regula el uso de la fuerza por parte del personal de la Policía Nacional, el nivel de uso y otros aspectos. Del mismo modo, el personal de la Policía Nacional que utiliza la palabra "fuerza", en varios niveles, como un medio en el marco de la ley, en diversas situaciones, para controlar un

escenario que representa una intimidación o una seguridad, un orden público. La honestidad o la vida de las personas. Además, indica que las herramientas policiales son armas, dispositivos, dispositivos auxiliares y cualquier otro elemento auxiliar autorizado o provisto por el estado; estas herramientas son utilizadas por los agentes de policía para hacer frente a la seguridad o el orden público, la integridad o las amenazas a la vida de las personas.

La Policía, para cumplir el deber encomendado, está premunido de muchas facultades conferidas por el nuevo Código Procesal Penal, la Ley de la Policía Nacional del Perú y demás leyes conexas. Por ejemplo, la Policía puede detener a una persona, realizar registro domiciliario, incautar bienes, etc., las cuales pueden darse incluso sin una autorización de la autoridad judicial cuando se trate de un caso de flagrancia delictual.

Es en ese espacio donde, a veces, la labor policial se torna riesgosa, ya que pueden revelarse situaciones extremas y excepcionales, como, por ejemplo, que en una intervención policial en flagrancia los infractores reaccionen con armas de fuego para evitar la detención y, en consecuencia, puede producirse la muerte del atacante o del efectivo policial.

No obstante, en la normativa existen presupuestos, niveles, circunstancias y reglas de conducta para que se admita, excepcionalmente, el uso adecuado de la fuerza. Por ejemplo, para que el policía haga uso de la fuerza letal uso de arma de fuego es necesario que la persona contra quien se llevará a cabo la acción constituye un peligro directo y real de muerte o lesiones graves, con el fin de controlarlo y proteger la vida personal o la vida de los demás.



En este ejemplo, postulamos que será legítimo recurrir a las causas que eximen o atenúan la responsabilidad penal, en especial, a la eximente del inc. 11 del art. 20 del CP: “El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú que en cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentario, cause lesiones o muerte”.

Se insiste en que, conforme a la Constitución Política, la Policía Nacional del Perú, en esencia, es un cuerpo orgánico encargado del mantenimiento del orden interno, por esta razón, “la labor de la institución policial está estrechamente vinculada con la protección de los derechos fundamentales de las personas, en la medida de que el orden interno implica la ausencia de situaciones de afectación o amenaza al ejercicio de tales derechos” (Bermúdez, 2020, p. 1065).

En ese sentido, el art. VII.1 del título preliminar del D. Leg. N.º 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú, destaca la primacía de la persona humana y sus derechos fundamentales:

Defender y proteger a la persona humana, respetando su dignidad y garantizando la plena realización de sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta los derechos humanos, de género e interculturales; además de la prioridad en el funcionamiento de la policía.

En tanto, en el ejercicio del deber policial, normalmente y por regla general, el uso de la fuerza letal debe de evitarse, salvo que ocurran situaciones extremas de peligro para la vida o la integridad del propio efectivo o de un tercero. Aun frente a esa realidad, “una vez que se tenga conocimiento de que sus agentes de seguridad han hecho uso de armas de fuego con consecuencias letales, el

Estado debe iniciarex officioy sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva”. Esto no significa que, necesariamente, el agente policial será merecedor de sanción penal. Asimismo, no cabe asumir, a ciegas, que el uso de armas u otros medios de defensa con consecuencia de muerte o lesiones graves, en el ejercicio de la función, fue en forma reglamentaria.

Por otro lado, respecto a la protección policial, cuando el policía se encuentra en el cumplimiento de su deber, que se deriva del mandato constitucional, puede ser víctima de varios tipos penales, es por esa razón que el CP sanciona severamente al agresor si el sujeto pasivo es un miembro de la Policía Nacional: 108-A (“homicidio calificado por la condición de la víctima”); 108- C, inc. 5 (“sicariato con agravante”); 121.1 (“lesiones graves”); 122 (“lesiones leves”); 152.3 (“secuestro”); y 367 (“formas agravadas de violencia contra la autoridad”).

#### **2.1.1.4. Estándar Internacional para el uso de la fuerza y armas por parte de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales**

Sobre el uso de la fuerza, el Informe Anual 2015, en su capítulo iv.a, ha señalado lo siguiente:

En todos los estados, especialmente sus agentes del orden, la seguridad y protección del orden público está garantizada. Esta responsabilidad general se deriva del poder de los Estados para ejercer su poder, que luego busca limitar los derechos humanos “si bien los agentes estatales pueden recurrir al uso de la fuerza y en algunas circunstancias, se podría requerir incluso el uso de la fuerza letal, el poder del Estado no es ilimitado para alcanzar sus fines independientemente de la gravedad de ciertas acciones y de la

culpabilidad de sus autores”. Los derechos básicos a la vida y la inviolabilidad personal se establecen en los artículos de la Declaración Americana de Derechos y Responsabilidades del Hombre; Las Convenciones Cuarta y Quinta de los Estados Unidos no contienen la obligación negativa del Estado de no matar a las personas y no infligir sufrimiento a las personas bajo su jurisdicción, sino también de proteger y garantizar tales derechos.. En este sentido, el Estado debe minimizar cualquier riesgo a tales derechos mediante un escrutinio cuidadoso, adhiriéndose estrictamente a los principios y normas internacionales, de acuerdo con sus funciones de seguridad y orden público. (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 531).

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) tiene una posición clara al respecto, pues señala tres directrices: a) el Estado está en la obligación de capacitar a sus agentes sobre derechos humanos; b) los agentes del Estado tienen que hacer uso de sus armas de forma excepcional, tomando en cuenta en sus actuaciones los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad; y por último, c) El estado tiene la responsabilidad de proporcionar armas y municiones, incluidas armas para discapacidades menos letales. A continuación, explicaremos cada directriz.

#### **2.1.1.5. Capacitación del Estado**

De acuerdo al octavo Congreso de la ONU sobre prevención de delito y tratamiento del delincuente, celebrado en La Habana, Cuba en 1990, adoptó acuerdos que los Estados tienen que asumir para que sus funcionarios reciban capacitaciones y asesoramiento respecto al empleo de la fuerza y armas de fuego. En virtud de ello, este congreso sostuvo:

Al capacitar a los agentes del orden, los gobiernos y las agencias pertinentes prestarán especial atención a la ética policial y las cuestiones de derechos humanos, especialmente en el proceso de investigación, para encontrar herramientas que puedan cambiar el uso de la fuerza. Y armas de fuego, por ejemplo, resolución pacífica de conflictos, comportamiento masivo y negociaciones persuasivas, el estudio de técnicas de negociación y mediación, así como el uso de medios técnicos, con el objetivo de limitar el uso de la fuerza y las armas de fuego. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben revisar sus programas de capacitación y procedimientos operativos a la luz de casos específicos. [Ellos] brindarán orientación a los agentes que intervengan en situaciones en las que se utilice la fuerza o armas de fuego para hacer frente al estrés interno (Octavo, 1990, p. 20).

Es necesario que nuestras autoridades que forman a las fuerzas del orden, no solo asuman la responsabilidad de calificar adecuadamente al personal que incorporan, sino también brinden capacitaciones sobre los derechos humanos.

#### **2.1.1.6. Excepcionalidad**

Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la Corte IDH en donde se ha coincidido el uso de la fuerza, la cual tiene que estar justificado, por lo que debe satisfacerse los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

Respecto al principio de legalidad, la CIDH ha referido que el Estado tiene la obligación de normas de aprobación con jerarquía de leyes, de acuerdo con los estándares internacionales en esta materia, consignadas a regular el desempeño de los agentes del orden en el desempeño de sus ocupaciones. (Comisión

Interamericana de Derechos Humanos, 2009). A su vez, la Corte IDH ha señalado que “el uso de la fuerza debe estar dirigido a lograr un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio que contemple la forma de actuación en dicha situación” (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2015, p. 265).

El principio de absoluta necesidad debe probarse para determinar si se presentan disponibilidad de medios para proteger la vida y la integridad de una persona. No se ha demostrado la absoluta necesidad de usar la fuerza contra quienes no representan una amenaza directa (hay una consecuencia de perder la oportunidad cuando no se usa la fuerza) (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, p. 85)

El principio de proporcionalidad nos dice que el nivel de fuerza utilizado debe ser consistente con un nivel dado de resistencia. Dando a establecer el grado de cooperación, resistencia o agresión, se debe aplicar una medida de la variedad y uso progresivo de la fuerza, y una estrategia de negociación, control o uso de la fuerza basada en ella (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012, p. 85).

#### **2.1.1.7. Legislación comparada**

Muchos de estos problemas se presentan en países vecinos. A continuación, mencionaremos ejemplos concretos relacionados a la intervención policial y al uso de la fuerza en otros ordenamientos jurídicos.

##### **2.1.1.7.1. En Ecuador**

La noche del 21 de octubre del 2016, en el sur de Quito, tres hombres montados en dos motocicletas estaban amedrentando a

los moradores de aquel lugar con armas de fuego para quitarles sus pertenencias. Ante ese hecho, dos policías montaron un operativo y, después de una persecución, lograron intervenirlos. Al intentar detenerlos, un motociclista arrolló a uno de los policías, fracturándole la pierna. En ese momento, su compañero sacó su arma y disparó a uno de los motociclistas (Pilataxi, 2016, p. 74).

Respecto al caso expuesto, el 22 de octubre del 2016, a las 15:30, se llevó a cabo una audiencia para analizar la actuación del policía. Allí, “la Fiscalía indicó que, según los reportes, el uniformado disparó para precautelar la vida de un compañero suyo que ya había sido arrollado por la motocicleta. También refirió que el policía, luego de usar su arma y ver al sospechoso en el piso, llamó inmediatamente a una ambulancia” (Pilataxi, 2016, p. 74).

El manual de procedimientos de DD. HH. de la institución uniformada indica que “los agentes solo deben disparar sus armas contra personas en defensa de la vida”.

#### **2.1.1.7.2. En Chile**

La madrugada del 13 de junio del 2018 ocurrió un incidente en el que un conductor de Uber, Rodolfo Muñoz (20 años), que partía del Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez (Santiago) con un pasajero, se resistió a bajar de su vehículo para el control manifestando que la intervención era ilegal. De pronto, al querer acelerar el vehículo, el carabinero, que se encontraba al medio, le propinó dos disparos que le impactó en el antebrazo y hombro. Este caso fue investigado por la Fiscalía, la cual pidió el sobreseimiento; sin embargo, el Tribunal lo rechazó porque los antecedentes no estaban claros y era necesario que estos fueran dilucidados en un juicio oral.

Al respecto, Coutts señala lo siguiente:

Carabineros tiene un protocolo sobre cuándo es prudente (o se justifica) sacar su arma de servicio y apuntar con ella a una persona. Ya que cuando hablamos del empleo de armas de fuego, se trata del uso de la fuerza potencialmente letal. Que un carabinero la saque, es una medida extrema, que solo se justifica cuando se defiende la vida. Por eso, antes de hacerlo, se deben considerar los requisitos de legalidad, necesidad y proporcionalidad (Coutts, 2018, p. 74).

#### **2.1.1.7.3. En Colombia**

En Magdalena, Saúl Fernández (18 años), quien se encontraba en un billar, había robado una gaseosa. Ante ese hecho, dos oficiales, que acudieron al lugar, lo sacaron del billar y lo tomaron del cuello. En esos instantes, el intervenido los amenazó con un cuchillo, y, a pesar de que ya lo habían neutralizado, los policías le propinaron cuatro disparos, causándole la muerte. Estos hechos quedaron registrados en una cámara de seguridad, por lo que la familia del joven interpuso la denuncia contra los dos agentes.

En virtud de ello, el art. 3.D de la Ley N.º 18.315 del Procedimiento Policial ha señalado que “la represión es la acción policial que implica el uso de la fuerza física y las armas de fuego o cualquier otro medio material de coacción, en forma racional, progresiva y proporcional, a los efectos de restablecer el estado de cosas anterior a la conducta ilícita que lo ha alterado”. Aunado a ello, respecto a los principios de la actuación policial, el art. 4.1 de la misma ley sostiene que, “en el cumplimiento de su deber y como encargados de hacer cumplir la ley, el personal policial respetará y protegerá los derechos humanos de todas las personas”.

Estos casos presentados nos llevan a reflexionar que, por más que existan intervenciones a presuntos delincuentes, cada Estado se encuentra obligado a respetar sus derechos humanos. En nuestro país, al igual que los demás Estados, no está permitido disparar a un presunto delincuente para capturarlo, pues la única excepción, reiteramos, es que tal sujeto ponga en riesgo la vida de terceros o del propio efectivo policial que lo persigue.

Uno de los casos que tienen mucha incidencia en nuestro país son las intervenciones por infracciones de tránsito. A través de los medios de comunicación hemos visto que varones y mujeres agreden a policías, incluso los retan a pelear. Por ejemplo, en Ica, un chofer incurrió en una infracción porque estacionó su vehículo en una zona restringida, por ello un efectivo policial que circulaba por la zona lo intervino, al observar la renuencia del chofer intentó ponerle las marrocas, pero este no se lo permitió debido a que era de mayor corpulencia que el agente policial, entonces el efectivo, viendo que no lo podía reducir, pidió apoyo a otros colegas, y de forma iracunda tomó la postura de querer boxear con el chofer.

Estos eventos no deben de ocurrir, pero se presentan porque no hay sanciones que disuadan este tipo de conducta. En este caso, el efectivo no podría utilizar el arma de fuego porque sería desproporcional que ante una bofetada o un golpe de puño tenga que sacar su armamento oficial y disparar al agresor, tampoco tiene que llegar a perder el control de la intervención y liarse a golpes con este. Una solución ante estos eventos es que se utilice armas no letales que puedan inmovilizar al agresor, porque tampoco se va a esperar que este termine golpeando al policía. Asimismo, es necesario que cuando se practiquen este tipo de operativos, el efectivo policial no se encuentre solo, tiene que contar con apoyo.



Si damos una mirada a algunas intervenciones realizadas en otros Estados (en YouTube hay muchas), encontraremos que la mayoría de ciudades del mundo también han lidiado con casos como el expuesto. Sin embargo, cuando usan la fuerza contra el presunto agresor, el efectivo policial cuenta con un colega de apoyo, entonces, ante el primer acto de resistencia que manifiesta el intervenido, proceden a reducirlo rápidamente en algunas oportunidades lo ponen al piso de la vereda o de la pista, le colocan los grilletes y lo conducen al vehículo policial.

Debemos tener en cuenta que no se puede exponer a nuestros efectivos policiales a casos como estos. De otro lado, si el intervenido considera que el policía está actuando de manera arbitraria, puede denunciarlo, para acreditar los hechos bastará que haya filmado la intervención con su celular (hoy en día casi todos los conductores lo poseen) o que haya un testigo, pero no puede agredir verbal ni físicamente a un efectivo policial.

A su vez, estos hechos deben ser castigados con la pena de inhabilitación, mediante la cancelación de la licencia de conducir o su suspensión, según el grado de afectación. También es posible que la cancelación de la licencia de conducir se fije mediante vía administrativa, porque el conductor que ataca de esa manera a una autoridad policial que controla el tránsito no muestra las condiciones para seguir conduciendo un vehículo, con mayor razón si es de transporte público.

Por ello, es necesario que las agresiones no físicas contra efectivos policiales, como, por ejemplo, escupitajos, insultos denigrantes (llamar corrupto al policía), tratos denigrantes (romper el uniforme del policía), se incorporen al Código Penal como faltas graves y que se sancione con penas de servicio a la comunidad. Asimismo, consideramos que la violencia física en agravio de un efectivo

policial con un diagnóstico que no supere los 10 días de incapacidad, no debe ser una falta. Según el criterio vinculante adoptado por el Acuerdo Plenario Extraordinario N.º 1-2016, tipificar el hecho como falta no disuade que se cometan este tipo de agresiones contra un efectivo policial, pero sancionarlo con una pena de 8 a 12 años es desproporcional si lo comparamos con otras conductas que nuestro Código Penal reprime.

Ya que se pretende reevaluar la Ley N.º 31012, sería una buena oportunidad para que se pueda revisar las conductas tipificadas en el art. 367 del CP, de modo que sus respectivas sanciones sean proporcionales al daño causado.

Finalmente, la protección policial que titula esta ley no responde a un Estado constitucional de derecho. Pues debe considerarse, en primer lugar, el principio de proporcionalidad en el uso del arma de fuego, de modo que no se reste valor a los derechos humanos de un sospechoso o presunto inocente, siempre y cuando este no ponga en peligro la vida de terceros ni del efectivo policial. En segundo lugar, debe reconocerse las garantías que requiere un efectivo policial o militar sobre sus actuaciones en cumplimiento de su deber. En efecto, lo que realmente va a brindar mejores condiciones en el cumplimiento de su deber es hacer reformas legales que sean favorables para su trabajo, lo que incluye capacitaciones frecuentes y la implementación del Estado para el uso de armas no letales.

## **2.1.2. Legislación**

### **2.1.2.1. Marco legal para el cumplimiento del deber en las actuaciones policiales**

Los antecedentes que tiene nuestro país respecto a este tema datan del 2007, dado que nuestro Código Penal ya contenía la eximente de responsabilidad penal: “[...] en cumplimiento de un deber”. Así,

nuestro legislador quiso ser específico cuando se refirió a un agente estatal, pues el 22 de julio del 2007, mediante el D. Leg. N.º 982, incluyó en el art. 20.11 del citado código: “El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. Si bien la incorporación de esta eximente específica fue bien vista en su oportunidad, no dejó de recibir críticas, al cabo de un tiempo de su vigencia, porque se incluyó el término: “[...] en forma reglamentaria”.

Esta norma se modificó el 13 de enero del 2014, mediante la Ley N.º 30151, donde se cambió el término “en uso de sus armas en forma reglamentaria”, por “uso de sus armas u otros medios de defensa”. Al respecto, consideramos que fue innecesario la innovación que hizo nuestro legislador porque al precisar “en uso de sus armas”, se entiende que son las que le asignan según el lugar, destacamento o tipo de operativo que realizará. Asimismo, esta eximente de responsabilidad penal fue insuficiente si atendemos que era necesario establecer un marco legal más amplio que regule el uso de la fuerza por parte del personal policial, donde se incluyan sus derechos y responsabilidades, además de ser conforme a la Constitución Política del Perú y a las recomendaciones de la Corte IDH.

En el 2015, el Congreso delegó al Poder ejecutivo para legislar sobre la seguridad ciudadana y fortalecer la lucha contra el crimen y el crimen organizado. Es así que el 15 de agosto del 2015 se publicó el D. Leg. N.º 1186, con su reglamento D. S. N.º 012-2016-IN. Consideramos que esta última legislación resulta ser la más apropiada para garantizar que la labor policial en cumplimiento de su deber sea con arreglo a la Constitución, ya que incluso se han establecido principios que son acordes a las sentencias emitidas por la Corte IDH, del cual somos parte. Muchos, al no estar de

acuerdo con la normativa, sostienen que se deberían establecer políticas públicas más drásticas, como, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas también salgan a patrullar para evitar el crecimiento de la delincuencia. Esta es una posibilidad muy remota si tomamos en cuenta que la Constitución no provee tal función. No obstante, lo puede permitir, como excepción, cuando se da una declaratoria de emergencia. A su vez, la Corte IDH tampoco considera que esto sea posible según los fundamentos de muchas de sus decisiones.

Por último, respecto a la reciente Ley N.º 31012, Ley de Protección Policial, publicada el 28 de marzo del 2020, además de contener algunos errores como la no aplicación de la prisión preventiva y detención preliminar a las fuerzas del orden, que será tratado más adelante, se puede observar que, mediante la única disposición complementaria derogatoria de la referida ley, se ha derogado el principio de proporcionalidad (literal c del numeral 1 del art. 4 del D. Leg. N.º 1186). Este principio ha sido considerado por la Corte IDH como uno de los que se debe evaluar ante la excepcionalidad del uso de las armas de fuego por el agente estatal.

Asimismo, tal disposición complementaria indica que se deja pasmado, de acuerdo al caso, las disposiciones legales o normativas que presenta la ley. Ante ello, consideramos que tal ley debió ser observada en su oportunidad por el Ejecutivo y que ahora debe ser revisada por el Congreso, para que nuestras normas legales se mantengan acordes al estándar internacional que nos exigen los derechos humanos.

#### **2.1.2.2. La Ley N.º 31012, Ley de Protección Policial, y los derechos fundamentales del ciudadano.**

Es claro que la intención del legislador ha sido brindar las mayores garantías al personal policial que, en cumplimiento de su deber, hace uso del arma de fuego. Al respecto, tenemos como antecedente el caso del efectivo policial Elvis Miranda, quien, en una persecución a un presunto imputado por el delito de robo en un asentamiento humano del distrito de Castilla (Piura), disparó y le ocasionó la muerte. Debido a ello, el suboficial viene afrontando un proceso por homicidio doloso, en la que incluso, al principio, estuvo con mandato de prisión preventiva, pero a través de una demanda de hábeas corpus a su favor se decretó su libertad, a la fecha tiene la medida de comparecencia con restricciones.

Es equivocado considerar que, excluyendo el principio de proporcionalidad, regulada en el D. Leg. N.º 1186, se va a generar una protección al agente policial de modo que pueda desempeñar con eficacia su función.

Por ejemplo, un efectivo policial recibe la información que tres jóvenes ingresaron a robar el dinero contenido en la caja de un minimarket, y como uno de los ladrones estaba provisto de un arma blanca pudieron lograr su cometido, por lo que salen por la puerta de la tienda. En esos momentos, el agente policial llega, saca su arma de fuego y les grita: “¡Alto, es la Policía!”. Uno de los jóvenes insulta al policía y le replica: “¡Dispara pues!”. Entonces el agente policial hace un disparo al aire e inmediatamente empiezan a correr los jóvenes, y, como ya les había advertido, dispara en dirección al hombro de uno de los jóvenes.

Sin embargo, la bala le llega a impactar por la espalda, que atraviesa su corazón y le causa la muerte, los otros dos jóvenes

siguieron corriendo. Al final, se determina que este joven era menor de edad. ¿Qué es lo que sucede en este ejemplo? Digamos que se cumplieron los principios de legalidad y necesidad, pues el efectivo policial, que estaba ante un robo flagrante, tiene la información que uno de ellos contaba con un arma blanca, pero desconoce que los otros dos tengan armas; asimismo, se identifica como policía y hace un disparo al aire, finalmente, dispara al joven. ¿Hubo proporcionalidad? ¿Por qué sacar el arma y disparar si ninguno de los jóvenes hizo algún gesto, movimiento sospechoso o atacó a un tercero o al propio efectivo?

Debido a los fallos de la Corte IDH, el principio de proporcionalidad ha sido considerado por muchas legislaciones extranjeras. En efecto, no debe concederse la eximente de responsabilidad penal, para un efectivo policial o miembro de las Fuerzas Armadas, solo porque se actuó con base en el principio de legalidad, pues en todos los casos el agente policial tendrá cómo justificarlo, salvo que se utilizará para cometer delitos (por ejemplo, solicitar dinero para evitar un control policial).

El principio de necesidad también se justificará porque se trata de un caso con pluralidad de agentes y a mano armada, dado que uno estaba armado y el efectivo tenía que tener el arma preparada para defenderse e hizo las advertencias del caso. En cambio, el principio de proporcionalidad exigiría algo más, ya que el uso del arma es excepcional, pues no peligraba la vida de un tercero ni del efectivo.

Caso distinto sería cuando el agente policial hace el disparo al aire, o incluso se identifica diciendo “¡Alto, es la policía!”, y observa que uno de los jóvenes hace un movimiento con su mano hacia la cintura, tratando de retirar al parecer un arma y, por tanto, el agente en ese escenario dispara porque pensó que lo que estaba

retirando de la cintura era un arma (solo son segundos para actuar, no hay una doble oportunidad).

### **2.1.3. Jurisprudencia**

#### **2.1.4. Caso SO3 PNP Elvis Joel Miranda Rojas**

El presente caso se suscitó el 13 de enero de 2019, aproximadamente a la 13:40 horas, cuando los policías estacionaron frente a S3NP Carlos Jr. Carlos Cruz (conductor) y S3NP Elvis Joel Miranda Rojas (operador) en servicio de patrulla. Universitarios, fueron advertidos por un ciudadano que una mototaxi amarilla y negra saldría de la calle de la Universidad San Pedro, por donde viajaban tres desconocidos, quienes agredieron al pasajero momentos atrás. Cuando apareció la mototaxi propuesta, su conductor, notando la presencia de policías, procedió a dar un giro en U y huyó por el mismo callejón por donde habían venido; Procediendo a perseguir a los policías, luego a una distancia de unos 500 metros, cada policía dispara un tiro beneficioso al aire; Para cuando se detiene el mototaxi, el hombre de Juan Carlos Ramírez Chocán desciende rápidamente del asiento trasero, corriendo con un acompañante al lugar, de igual manera se detiene la unidad policial y el operador de la PNP de S3 Elvis Joel Miranda Rojas y el arriba Ramírez Chocán La tortura comienza con cuatro disparos al aire, pero negándose a detenerse, el citado policía disparó un quinto tiro alcanzándolo en la zona vertebral del ya fallecido Juan Carlos Ramirez Chocán, provocando su muerte.

Por estos hechos, el Ministerio Público inició formalmente una investigación en contra la PNP Elvis Joel Miranda Rojas, por el delito de homicidio común y abuso de autoridad en agravio del occiso Juan Carlos Ramírez Chocan.

### **2.1.5. Motivos presentados por el Juzgado de Investigación Preparatoria y la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Piura**

La resolución que declaró fundada la prisión preventiva en contra del sub oficial de tercera Elvis Mirando Rojas, expedida por el Segundo Juzgado de Investigación Preparatorio de Castilla no tuvo en cuenta lo siguiente:

El uso efectivo de su arma de fuego estuvo reglamentado conforme al Decreto Legislativo 1186° numeral 8.3, literal e, en donde establece algunas reglas que rigen el uso extraordinario de fuerza letal. De esta manera en dicha norma se establece que miembros de la Policía Nacional del Perú pueden usar sus armas solo cuando sean estrictamente necesarias y solo cuando las medidas menos extremas sean inadecuadas, por lo que el uso extraordinario de fuerza letal bajo las siguientes condiciones: a) En defensa propia o de otras personas en caso de peligro real e inminente de muerte o lesiones graves; b) Cuando se produzca una situación que implique una seria amenaza para la vida durante la comisión de un delito particularmente grave; c) Cuando se genere un peligro real e inminente de muerte o lesiones graves como consecuencia de la resistencia ofrecida por la persona que vaya a ser detenida; d) Cuando la vida de una persona es puesta en riesgo real, inminente ya actual por quien se está fugando; y e) Cuando se genere un peligro real o inminente de muerte del personal policial u otra persona, por la acción de quien participa de una reunión tumultuaria violenta.

En el lugar del crimen no se pudo establecer si la víctima (fallecida) utilizó un arma, situación alegada por la defensa, en la que también se alega que la víctima intentó sacar un arma de fuego la cual presentaba riesgo de muerte o peligro. Inevitable para su vida, situación que no puede estar precisa debido a que el



arma de fuego reclamada por la defensa no fue encontrada en posesión de la víctima, y el dictamen del perito muestra que la víctima no usó el arma; entonces, la acción de la fuerza policial no se ha visto como justa.

Dicha resolución que concede al prisión preventiva fue apelada por la defensa técnica, sin embargo la Tercera Sala de Apelaciones de Piura, mediante resolución n° 09 de fecha 29 de enero de 2019 confirmó la misma, señalando que se habrían cumplido los presupuestos materiales consignados en el art. 268 del Código Procesal Penal, asimismo la defensa técnica manifestó de que el acusado Elvis Miranda, en su declaración inicial, insistió desde el principio en que el fallecido había gesticulado para sacar un arma, lo que significa que habría actuado en casos conocidos en teoría criminal, habiendo existido un error de prohibición invencible.

Así mismo las regulaciones nacionales y supranacionales, que rigen el uso de armas por parte de la policía nacional en funciones de servicio, siempre requieren el apego a los presupuestos oficiales y materiales especializados, tomando en cuenta su potencial letal y las condiciones técnicas y experimentadas de los policías; Esto se debe a que la ONU determina que los derechos humanos requieren que hagan uso de las armas de fuego siempre y cuando se utilicen solo en circunstancias extremas, mayormente cuando se aplique en favor de la defensa propia o de un tercero, con la finalidad de llegar a prevenir que se ocasione un escape de una lesión corporal o un delito particularmente grave.

#### **2.1.6. Posición de la Corte Superior de Justicia de Junín en Huancayo**

El juez, al declarar fundada la demanda de hábeas corpus, manifestó que no pretendía ni negaba que el beneficiario causó la

muerte de la víctima, sino la motivación para justificar cómo ocurrieron las circunstancias, es decir, determinar si el policía en activo utilizó de forma reglamentaria el arma de fuego. Regularlo de acuerdo con la ley en el marco de la intervención policial. Asimismo De acuerdo con los elementos de persuasión, entre ellos, injerencia, testimonio y otros hechos, este acto de muerte, según la fiscalía no se respetó los protocolos de la policía nacional y el efectivo a cargo disparó con el ánimo de matar.

El juez también declara claramente estar de acuerdo en que los jueces de segunda instancia no pudieron establecer si el acusado estaría ahora involucrado en la defensa en el juicio del acusado en el juicio constitucional en virtud del art. 20.11 a CP. Las decisiones de primera y segunda instancia coinciden en que el efectivo policial no usó de forma reglamentaria su arma de fuego (el argumento central) habiendo utilizado de manera incorrecta su herramienta de trabajo, además indicaron que no era necesario disparar a un presunto delincuente que estaba huyendo por la espalda, sin embargo no tomaron en cuenta la zona donde ocurrieron los hechos, la cual habría sido calificada como zona roja por el alto grado de delitos cometidos en ese lugar.

El f. j. n.º 3.4.21 de la Sentencia de Hábeas Corpus N.º 003-2019-CSJJ/2do.JIP-EBM señala lo siguiente:

Sostener que no concurriría culpa y que no estaría incurso preliminarmente en la eximente del artículo 20.11 del Código Penal, **por el sólo hecho de haber disparado y causado la muerte con el arma de reglamento** – si bien el delito atribuido es grave, de la que nadie duda-, empero sin tomarse en consideración –como se refirió- el contexto y las circunstancias en que se produjo el hecho (durante una intervención policial, persecución de un presunto delincuente), incluso –lo más grave- con tal conclusión, descartándose de todo –por omisión- el análisis de la previsión

legal estatuida en el artículo 21 del Código Penal – responsabilidad restringida- de la norma sustantiva penal en comento- si bien el sujeto procesal legitimado no la propuso, pero el juez conoce el derecho y debe aplicar al caso concreto [...].

El debate sobre el consentimiento definitivo para justificar o absolver se evita judicialmente por ser "cuestión de mérito o calidad" y será debatido en audiencia oral, aunque esta interpretación unilateral afecta los derechos de defensa del acusado. Esta posibilidad se niega y también afecta el derecho a una justa causa para la decisión del tribunal cuando no se da una respuesta razonable y coherente ante una situación grave como la prisión preventiva que debe considerarse una excepción como derecho excepcional.

## **CAPITULO III: RESULTADOS**

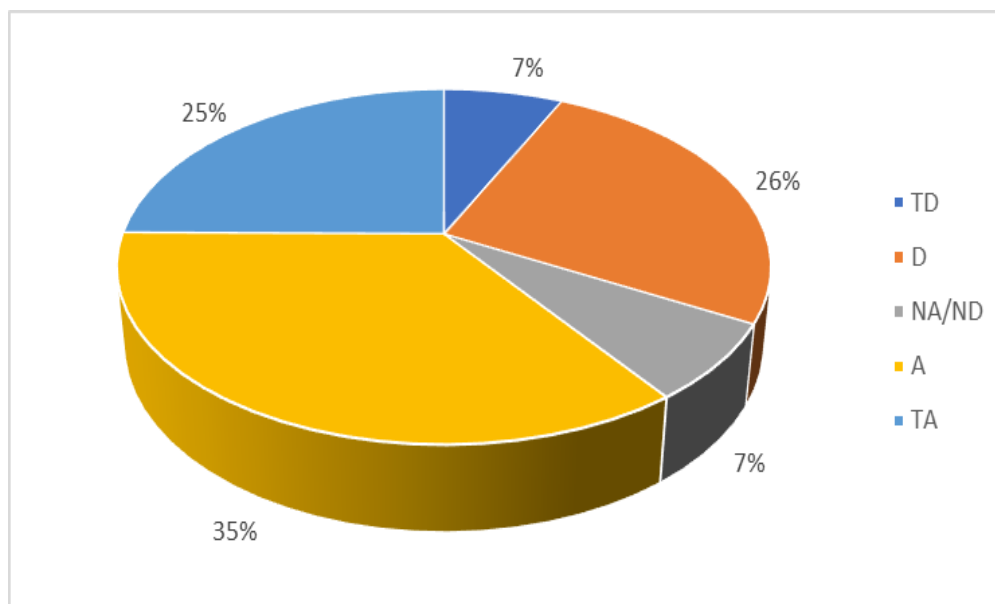
## I. RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS

### 4.1. Resultados en Tablas y Figuras

**Tabla 1.- El accionar policial es eficaz para el control interno del país**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	13	7.0
D	48	25.9
NA/ND	13	7.0
A	65	35.1
TA	46	24.9
Total	185	100.0

**Figura 1.- El accionar policial es eficaz para control interno del país**



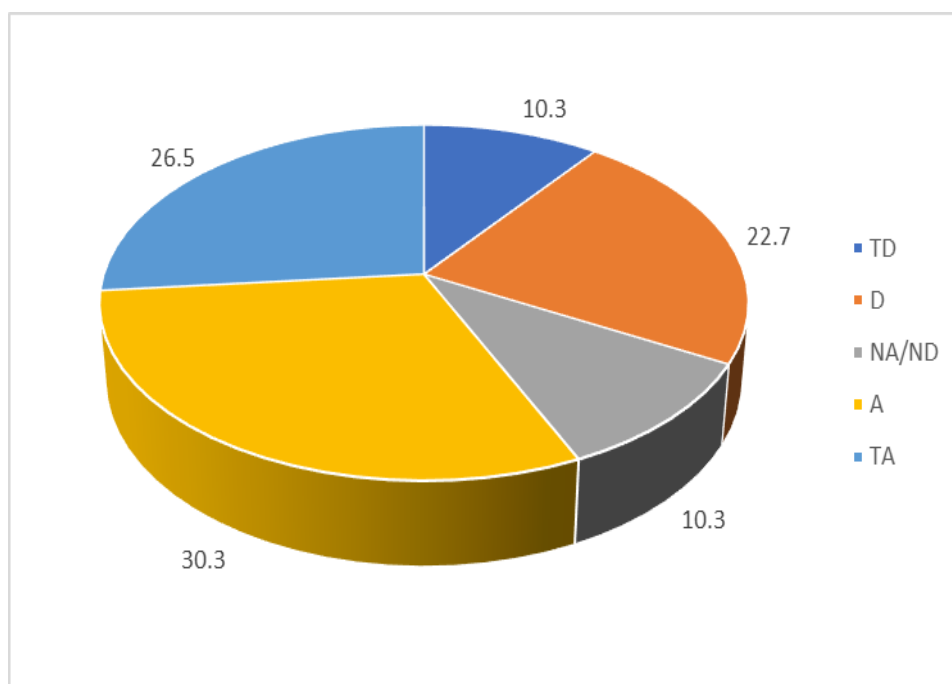
**Fuente:** Del autor

**Descripción 1:** Los resultados en función a si cree usted que el accionar policial es eficaz para el control interno del país, se ha obtenido un resultado de: totalmente en desacuerdo 7%, en desacuerdo 25.9%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 7%, de acuerdo 35.1%, totalmente de acuerdo 24.9%.

**Tabla 2.- Uso de armas de fuego se aplica correctamente en las intervenciones policiales.**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	19	10.3
D	42	22.7
NA/ND	19	10.3
A	56	30.3
TA	49	26.5
Total	185	100.0

**Figura 2.- Uso de armas de fuego se aplica correctamente en las intervenciones policiales.**



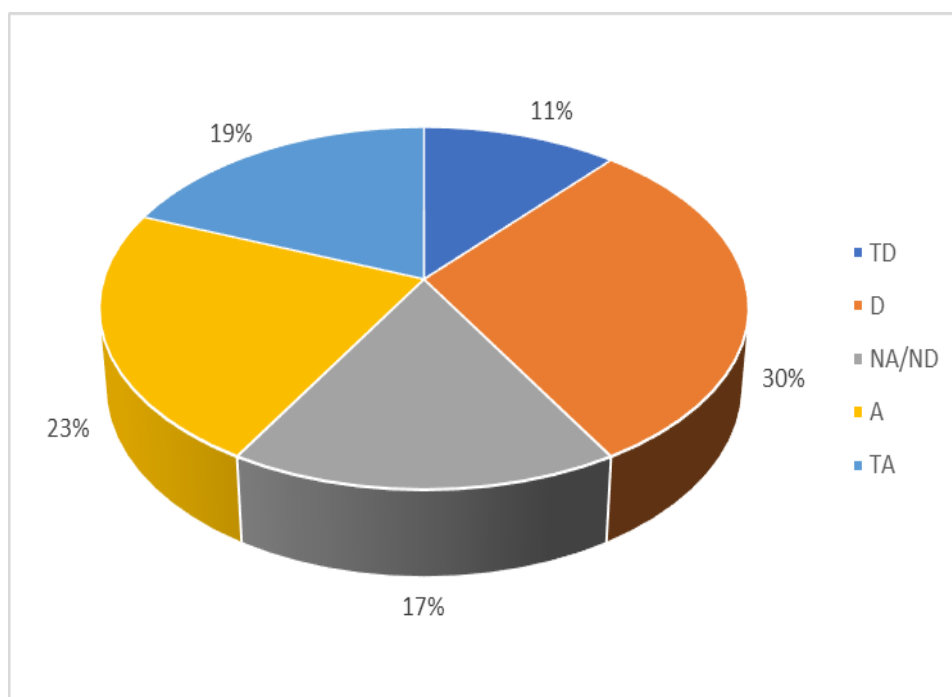
**Fuente:** Fuente: Del Autor

**Descripción 2:** Los resultados en función a si considera que el uso de armas de fuego se aplica correctamente en las intervenciones policiales se tiene que: totalmente en desacuerdo 10.3%, en desacuerdo 22.7%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 10.3%, de acuerdo 30.3%, totalmente de acuerdo 26.5%.

**Tabla 3.- No eximir de responsabilidad penal al efectivo policial que utiliza su arma de fuego en el cumplimiento de su deber.**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	21	11.4
D	56	30.3
NA/ND	31	16.8
A	42	22.7
TA	35	18.9
Total	185	100.0

**Figura 3.- No eximir de responsabilidad penal al efectivo policial que utiliza su arma de fuego en el cumplimiento de su deber**



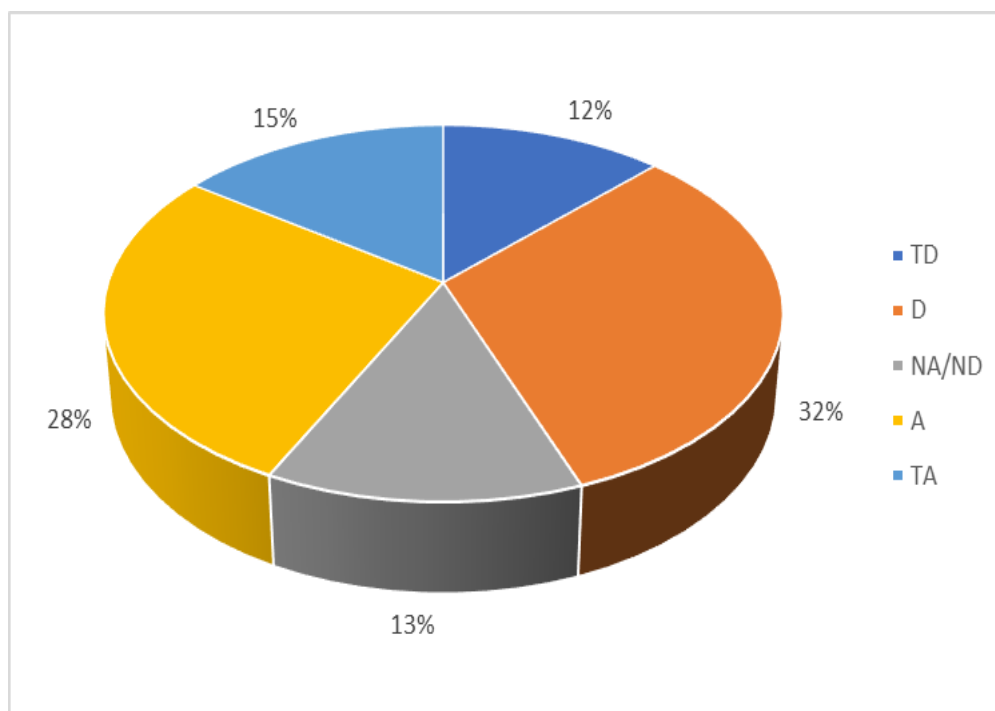
**Fuente:** Del Autor

**Descripción 3:** Los resultados en función a que al policía se le debe de eximir de responsabilidad de responsabilidad penal cuando utiliza su arma de fuego en cumplimiento de su deber se tiene que: totalmente en desacuerdo 11.4%, en desacuerdo 30.3%, %, ni de acuerdo ni en desacuerdo 16.8%, de acuerdo 22.7%, totalmente de acuerdo 18.9%.

**Tabla 4.- Actuar policial es siempre legítimo y justificado**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	23	12.4
D	59	31.9
NA/ND	24	13.0
A	51	27.6
TA	28	15.1
Total	185	100.0

**Figura 4.- Actuar policial es siempre legítimo y justificado**



**Fuente:** Del autor

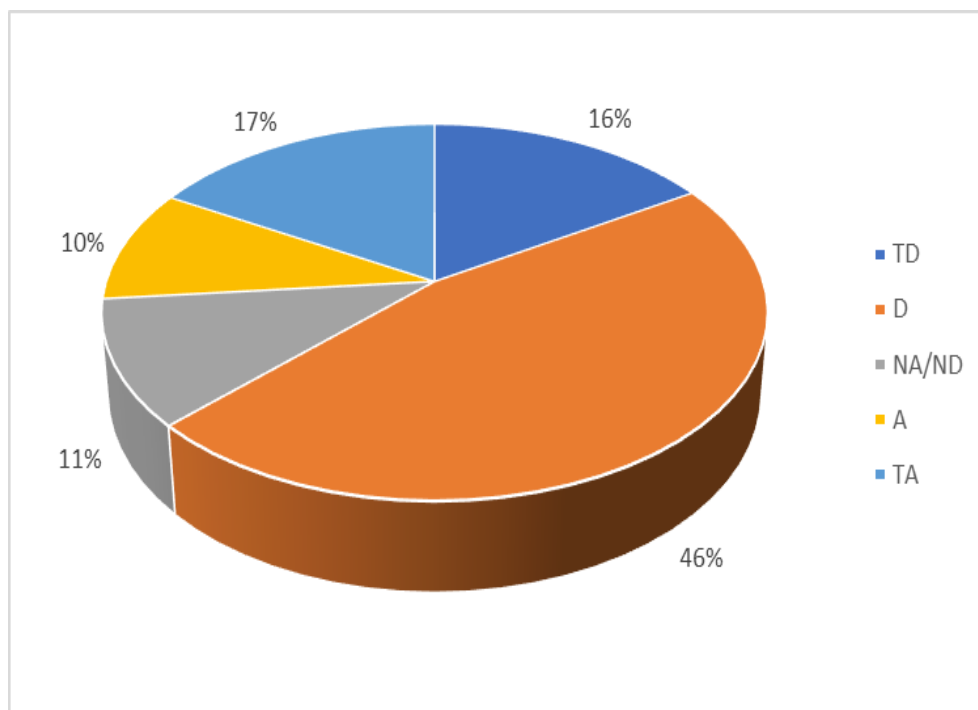
**Descripción 4:** Los resultados en función a si considera que la actuación policial debe ser legítimo y justificado se tiene que: totalmente en desacuerdo 12.4%, en desacuerdo 31.9%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 13%, de acuerdo 27.6%, totalmente de acuerdo 15.1%.



**Tabla 5.- Causa principal para eximir de responsabilidad penal al efectivo policial es la legítima defensa**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	30	16.2
D	86	46.5
NA/ND	20	10.8
A	18	9.7
TA	31	16.8
Total	185	100.0

**Figura 5.- Causa principal para eximir de responsabilidad penal al efectivo policial es la legítima defensa**



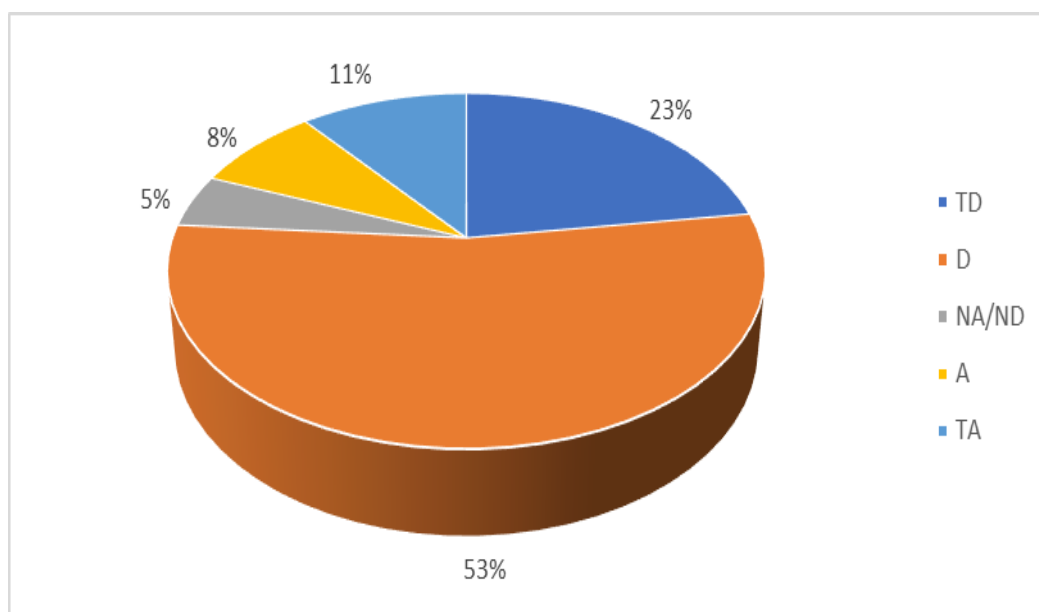
**Fuente:** Del Autor

**Descripción 5:** Los resultados en función a si cree usted que la causa principal para eximir de responsabilidad penal es la legítima defensa se tiene que: totalmente en desacuerdo 16.2%, en desacuerdo 46.5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 10.8%, de acuerdo 9.7%, totalmente de acuerdo 16.8%.

**Tabla 6.- La prisión preventiva impuesta a efectivos policiales cuando utilizan arma de fuego en cumplimiento de su deber es de acorde al derecho**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	42	22.7
D	99	53.5
NA/ND	9	4.9
A	15	8.1
TA	20	10.8
Total	185	100.0

**Figura 6.- La prisión preventiva impuesta a efectivos policiales cuando utilizan arma de fuego en cumplimiento de su deber es de acorde al derecho**



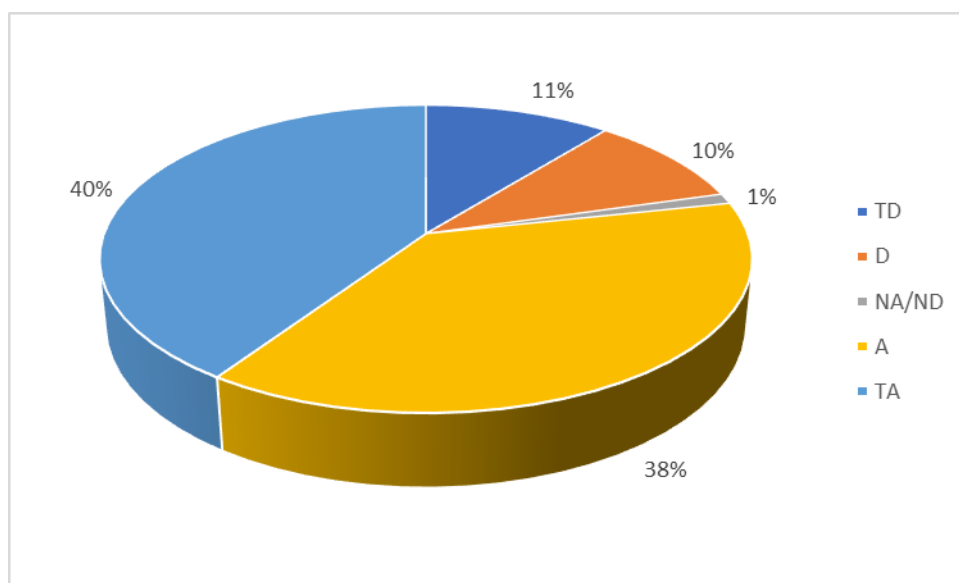
**Fuente:** Del Autor

**Descripción 6:** Los resultados en función a si se considera que la prisión preventiva impuesta a los efectivos policiales cuando utilizan arma de fuego en cumplimiento de su deber es arbitraria se tiene que: totalmente en desacuerdo 22.7%, en desacuerdo 53.5%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 4.9%, de acuerdo 8.1%, totalmente de acuerdo 10.8%.

**Tabla 7.- Interposición de la prisión preventiva vulnera el derecho a la libertad personal de los efectivos policiales.**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	20	10.8
D	18	9.7
NA/ND	2	1.1
A	70	37.8
TA	75	40.5
Total	185	100.0

**Figura 7.- Interposición de la prisión preventiva vulnera el derecho a la libertad personal de los efectivos policiales.**



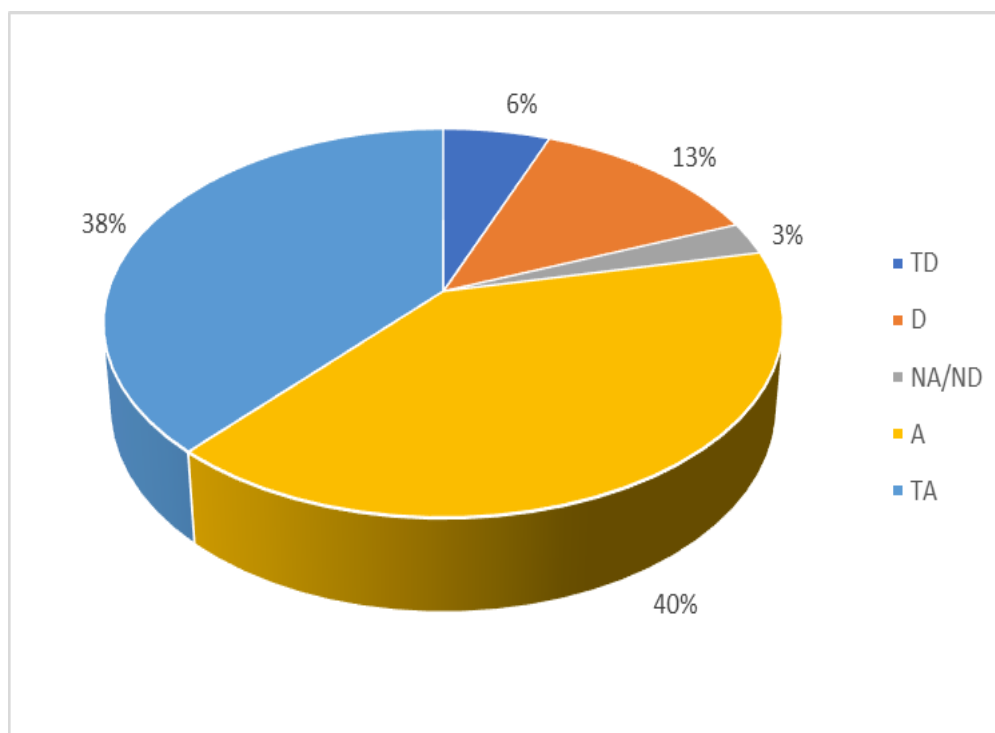
**Fuente:** Del Autor

**Descripción 7:** Los resultados en función a si cree usted que la interposición de la prisión preventiva vulnera el derecho a la libertad personal del efectivo policial se tiene que: totalmente en desacuerdo 10.8%, en desacuerdo 9.7%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 1.1%, de acuerdo 37.8%, totalmente de acuerdo 40.5%.

**Tabla 8.- La prisión preventiva viola los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional del Perú.**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	11	5.9
D	24	13.0
NA/ND	5	2.7
A	74	40.0
TA	71	38.4
Total	185	100.0

**Figura 8.- La prisión preventiva viola los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional del Perú.**



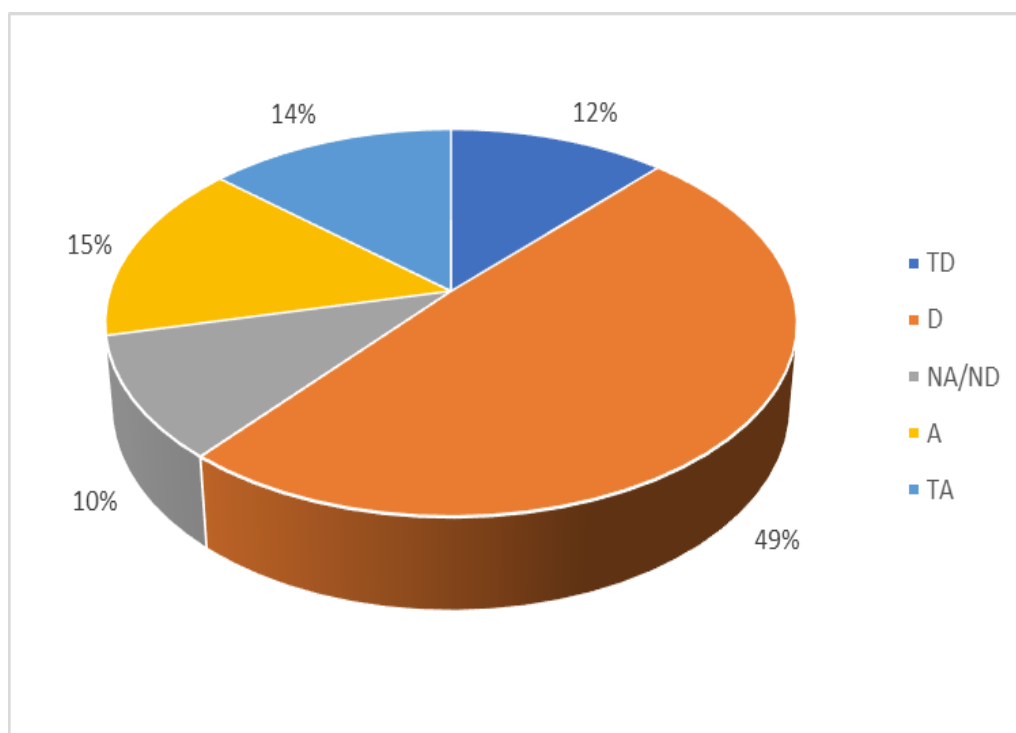
**Fuente:** Del Autor

**Descripción 8:** Los resultados en función a si considera que la prisión preventiva viola los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional del Perú., se tiene que: están totalmente en acuerdo 5.9%, en desacuerdo 13.0%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 2.7%, de acuerdo 40%, totalmente de acuerdo 38.4%.

**Tabla 9.- Se plantea derogar la eximente de responsabilidad penal que protege a la Policía Nacional del Perú cuando utiliza su arma de fuego en cumplimiento de un deber**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	22	11.9
D	91	49.2
NA/ND	19	10.3
A	28	15.1
TA	25	13.5
Total	185	100.0

**Figura 9.- Se plantea derogar la eximente de responsabilidad penal que protege a la Policía Nacional de Perú cuando utiliza su arma de fuego en cumplimiento de un deber.**



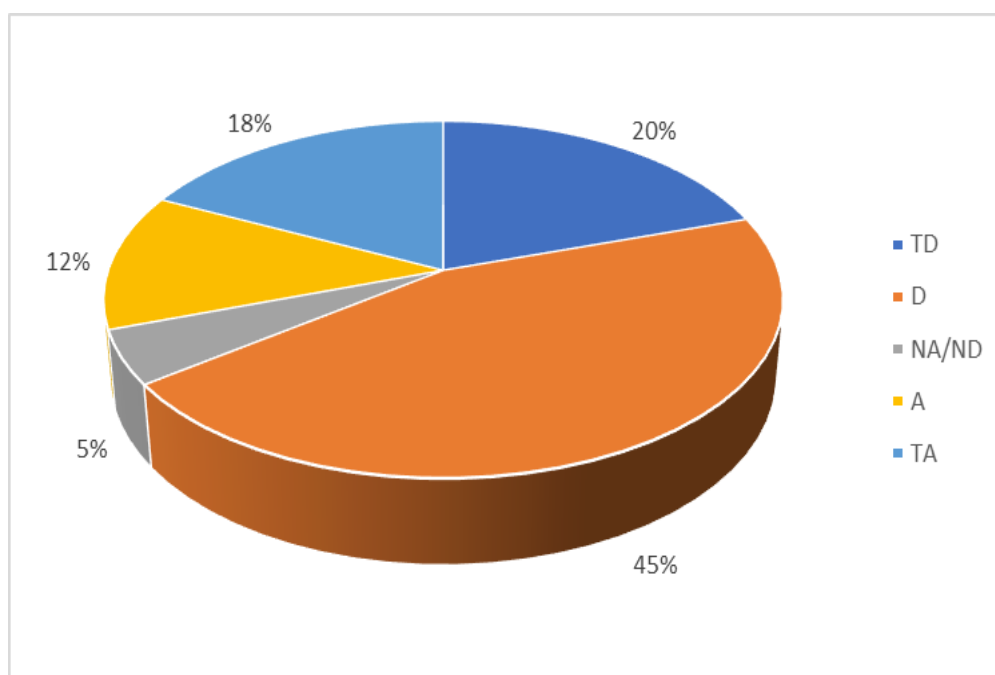
**Fuente:** Del Autor

**Descripción 9:** Los resultados en función a si cree usted que se debe derogar la eximente de responsabilidad penal que protege a la Policía Nacional del Perú cuando utiliza su arma de fuego en el cumplimiento de su deber, se tiene que: están totalmente en desacuerdo 11.9%, en desacuerdo 49.2%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 10.3%, de acuerdo 15.1%, totalmente de acuerdo 13.5%.

**Tabla 10.- Uso de la fuerza en las intervenciones policiales no vulnera derechos fundamentales de las personas.**

Descripción	Frecuencia	Porcentaje
TD	37	20.0
D	83	44.9
NA/ND	9	4.9
A	23	12.4
TA	33	17.8
Total	185	100.0

**Figura 10.- Uso de la fuerza en las intervenciones policiales no vulnera derechos fundamentales de las personas.**



**Fuente:** Del Autor

**Descripción 10:** Los resultados en función a si cree usted que el uso de la fuerza en las intervenciones policiales vulnera derechos fundamentales de las personas, se tiene que: totalmente en desacuerdo 20%, en desacuerdo 44.9%, ni de acuerdo ni en desacuerdo 4.9%, de acuerdo 12.4%, totalmente de acuerdo 17.8%.

## **CAPITULO IV: ANALISIS DE LOS RESULTADOS**

De acuerdo a los datos obtenidos en la figura 01, tabla N°01, se tiene que si cree usted que el accionar policial es eficaz para control interno del país, se ha obtenido un resultado en donde expresan que están de acuerdo 35.1% de los encuestados, en esa misma línea el autor Ugaz Heudebert Juan Diego (2019), señala lo siguiente: En cuanto a la superación de los oficiales secundarios, hay dos supuestos. La primera ocurre cuando la orden es legal y la secundaria cuando actúa ilegalmente. En este caso, si el superior presenta instrucciones legales y toma acción ilegal secundaria, no será responsable penalmente por su comportamiento jerárquico a menos que la ley le exija controlar el debido cumplimiento de la orden. Como segundo supuesto, cuando la acción excesiva de los oficiales subordinados se relaciona con lo ordenado, los primeros deben responsabilizarse de este exceso, así como de su acto jerárquico. Una situación diferente es cuando los subordinados realizan acciones excesivas, punitivas y no están relacionadas con la orden. En estos casos el superior no responde penalmente.

Como bien expresa el autor Pineda Arteaga César Augusto (2005), en su conclusión menciona: Se determinó la importancia de la distinción entre las causas del delito y los motivos de justificación, lo que indica una mejor percepción del derecho penal en su parte general.

Los resultados en función a que si la prisión preventiva impuesta a efectivos policiales cuando utilizan arma de fuego en cumplimiento de su deber es de acorde a derecho, de acuerdo a la figura 06, tabla N° 6, se tiene que los encuestados determinan estar : en desacuerdo 53.5%. Por otro lado el autor Rivera Barrantes Daniel Enrique (2016), en su conclusión expresa: El país carece de la capacidad del Estado para prevenir y controlar los conflictos; Por tanto, el Estado debe estar preparado para buscar un canal de cambio hacia una institución estatal estable y democrática que pueda ser un catalizador de esfuerzos conjuntos para abordar las



causas estructurales del conflicto, mediante la implementación de políticas públicas adecuadas para abordar los Conflictos socioambientales.

También expresa el autor Carlos Ordoñez Juan (2016). En su investigación: *“Impunidad De La Actuación Funcional de los Miembros de La Policía Nacional Del Perú en el Distrito De S.J.L, Año 2016”*, en su conclusión señala: El ordenamiento jurídico peruano, Ley No. 30151, actualmente excluye a los miembros de las fuerzas armadas y la responsabilidad penal de la Policía Nacional en el Perú que causen lesiones o muerte en el desempeño de sus funciones y utilicen armas u otros medios de defensa; Sin embargo, esta norma no regula expresamente el cumplimiento del principio de legalidad y caracterización que ocurre cuando los agentes de la Policía Nacional del Perú utilizan arbitrariamente a sus jefes y otras medidas de seguridad en el desempeño de sus funciones, negligencia o indefensión y resultan en la muerte de la víctima; Esta situación abre la posibilidad de diversas interpretaciones hipotéticas, restringiendo a los policías en cuestión prohibidos en materia penal, dado que el derecho a la vida es un bien jurídico de importancia constitucional..

De los resultados en función a que se plantea derogar la eximente de responsabilidad penal que protege a la Policía Nacional de Perú cuando utiliza su arma de fuego en cumplimiento de un deber.se tiene que: están en desacuerdo 49.2% respondieron de los encuestadores, lo cual lo podemos determinar la figura 09, tabla N° 09, lo cual lo podemos determinar el con el autor Saavedra Trujillo Rosner Jonny (2013). En investigación: *“Aplicación del Estado de necesidad Justificante y Exculpante Como Fundamento Eximente de la Responsabilidad Penal”*, en su conclusión menciona: Estas causas de justificación en derecho penal, así como los efectos que provoca el desarrollo de definiciones de reclamos para que coincidan en el hecho de la finalidad. Por tanto: primero, desde el

ámbito de la teoría criminal peruana, es necesario desarrollar las razones de la justificación en general, a fin de localizar el estado de necesidad previsto en los párrafos especificados.

Y también lo determina el autor Muñante Barrios Alejandro (2017). En su investigación: *“Aplicación Del Artículo 20 Del Código Penal Y El Trastorno Mental Transitorio Causado Por Drogadicción Y Ebriedadlima 2015-2016”*, en su conclusión determina: La aplicación del artículo 20 del Código Penal y las sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional de la Ciudad de Lima padecen trastorno mental transitorio, empirismo y violación de la aplicación por adicción a las drogas e intoxicación; las experiencias exitosas se relacionan y manifiestan por el hecho de que la comunidad jurídica es responsable de probar el desconocimiento de los enfoques y normas teóricos.

En relación a la figura 10, tabla N°10, determinar si cree usted que el uso de la fuerza en las intervenciones policiales vulnera derechos fundamentales de las personas. se tiene que los encuestados respondieron que están en desacuerdo en un 44.9%, lo cual hace mención el autor Carlos Ordoñez Juan (2016). En su investigación: *“Impunidad De La Actuación Funcional de los Miembros de La Policía Nacional Del Perú en el Distrito De S.J.L, Año 2016”*, en su conclusión señala: Actualmente en el ordenamiento jurídico peruano, la Ley N.º 30151, establece la exclusión de los miembros de las fuerzas armadas y la responsabilidad penal de la Policía Nacional del Perú, que causen lesiones y muerte en el desempeño de sus funciones y uso de sus armas u otros medios de protección; sin embargo, dicha norma no regula explícitamente el apego al principio de legitimidad y caracterización que ocurre cuando miembros de la Policía Nacional del Perú utilizan arbitrariamente a sus amos y otros medios de seguridad en el ejercicio de su deber, negligencia o lesiones ilícitas y causa la muerte de la víctima; Esta situación abre la posibilidad de diversas interpretaciones

hipotéticas, que restringen a los policías en cuestión, quienes están prohibidos en el ámbito penal, dado que el derecho a la vida es una propiedad jurídica de importancia constitucional.

Por otro lado el autor Cornejo Zapata María Baldramina & Cajas Pacheco Edison Xavier (2010). En su investigación: *“Incidencia De La Legítima Defensa Personal En La Legislación Penal Ecuatoriana, En La Provincia De Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio “Dr. Estupiñan”, Periodo 2001-2002”*, en su conclusión establece: La mayoría de los residentes dicen que una persona es inocente, a menos que se revele su responsabilidad, sin embargo, por falta de preparación, desconocen este fundamento legal previsto en la Constitución de la República del Ecuador, por lo que dan esta respuesta por un descuento.

## **V. CONCLUSIONES**

- a) Frente a los nuevos alcances normativos que se presentan se establece que, si se aplica de forma correcta y eficaz las eximentes de responsabilidad penal el uso de la fuerza a través del manejo del arma de fuego en los efectivos policiales, debido a que con ello se garantiza la función constitucional que cumple la Policía Nacional del Perú.
- b) La finalidad de las eximentes de la responsabilidad penal del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional va conforme a lo determinado por Ley N.º 31012 debido a que dispone la interpretación del principio de razonabilidad de medios a favor del policía interviniente y se deroga el principio de proporcionalidad de uso de armas o medios de defensa.
- c) Uno de los casos más analizados es el del PNP Elvis Joel Miranda Rojas en donde se analiza la inexistencia de la seguridad jurídica, pues esta orientación legal, directa o indirectamente, podría desencadenar excesos en la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
- d) Frente a los nuevos alcances normativos se establece que el D.Leg. N.º 1186 tiene como objetivo lograr el control de una situación que constituye una amenaza o un atentado contra la seguridad, el orden público, la integridad y la vida de las personas. Así, su uso responde a circunstancias distintas a la legítima defensa bajo los alcances del art. 20.3 del Código Penal.
- e) La eximente de responsabilidad penal estipulada en el art. 20.11 del Código Penal debe seguir vigente porque coadyuva a lograr mitigar las acciones criminales realizadas en nuestra sociedad.

## **VI. RECOMENDACIONES**

- a) Se recomienda la evaluación de cada caso concreto y la aplicación de la eximente de responsabilidad penal consignada en el art. 20.11 del Código Penal.
- b) Se recomienda la aplicación de las nuevas normativas en función al uso de la fuerza policial, para que se pueda eximir de responsabilidad al efectivo policial.
- c) Se requiere tomar en cuenta derecho a la legítima defensa y a la sociedad, según lo establece la ley, el principio de equidad en los medios se interpretará a favor del personal policial involucrado

## **BIBLIOGRAFIA**



- Arévalo, L. & Baila, R. (2015). *“La Reducción De La Capacidad Penal A 16 Años De Edad En El Código Penal Peruano”*, (Tesis) Universidad Señor de Sipan.
- Bacigalupo, E. (1999). *“Derecho penal. Parte general”*, 2ª ed., Buenos Aires: Hammurabi.
- Bermúdez, M y Aliaga F. (2020). *Iurisprudencia constitucional*, Lima: Ediciones Legales
- Bramont-Arias, L. (2008). *“Manual de Derecho Penal”*. Parte general, 4ª ed., Lima: San Marcos.
- Briceño, J. (2012). *“Legítima defensa en el derecho venezolano”*, (Tesis) Universidad Católica Andrés Bello.
- Cari, D. (2017). *“Eficacia de la Intervención Policial en los delitos de flagrancia delictiva en el distrito de San Martín de Porres del año 2016”*, (Tesis) Universidad César Vallejo.
- Cobo, M. & Tomás, A. (1996). *“Derecho penal. Parte general”*, 4.a ed., Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009). Informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, Washington
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2015). Informe Anual 2015, Washington
- Cornejo, M. & Cajas, D. (2010). *“Incidencia De La Legítima Defensa Personal En La Legislación Penal Ecuatoriana, En La Provincia De Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Eloy Alfaro, Barrio “Dr. Estupiñán”, Periodo 2001-2002”*, (Tesis) Universidad Técnica de Cotopaxi.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012). caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, San José
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2012). caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana, San José
- Corte Interamericana de Derechos Humanos (2015) caso Cruz Sánchez y otros vs. Perú, San José
- Coutts, M. (2018). ¡Alto ahí! ¡Carabinero! ¿Cuándo la policía puede sacar un arma y disparar?”, en El Definido, Providencia

- Günther, J. (1997) *“Derecho penal. Parte general”*, Madrid: Marcial Pons, p. 225.
- Günther, J. (1997). *“Derecho penal. Parte general”*, Madrid: Marcial Pons.
- Informe N.º 12/96 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Véase al respecto el párrafo 84. Recuperado de <<https://bit.ly/2Fy5tXQ>>.
- Maier, J. (1982) *“La ordenanza procesal penal alemana: su comentario y comparación con los sistemas de enjuiciamiento penal argentinos”*, vol. ii, Buenos Aires: De palma, p. 127.
- Maier, J. (1982). *“La ordenanza procesal penal alemana: su comentario y comparación con los sistemas de enjuiciamiento penal argentinos”*, vol. ii, Buenos Aires: De palma,
- Mellado citado por Neyra, J. (2010). *“Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral”*, Lima: Idemsa, p. 514.
- Morales, L. (2015). Enciclopedia de criminalística, criminología e investigación, 2.a ed., t. I, Bogotá: Sigma Editores
- Muñante, A. (2017). *“Aplicación Del Artículo 20 Del Código Penal Y El Trastorno Mental Transitorio Causado Por Drogadicción Y Ebriedad lima 2015-2016”*, (Tesis) Universidad Señor de Sipan.
- Muñoz, F. & García, A. (2010). *“Derecho penal. Parte general”*, 8ª ed., Valencia: Tirant Lo Blanch.
- Neyra, J. (2010). *“Manual del nuevo proceso penal y de litigación oral”*, Lima: Idemsa,
- Octavo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (1990). Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, La Habana

- Ordoñez, J. (2016). *“Impunidad De La Actuación Funcional de los Miembros de La Policía Nacional Del Perú en el Distrito De S.J.L, Año 2016”*, (Tesis) Universidad Cesar Vallejo.
- Peña Cabrera, A. (2015). *“Derecho penal. Parte general”*, vol. I, 5.ª ed., Lima: Idemsa.
- Pilataxi, G. (2016). Policía que disparó contra un sospechoso en Quito quedó en libertad, en El Comercio, Quito
- Pineda, C. (2005). *“Estudios sobre las eximentes de la responsabilidad penal con énfasis en las causas de inculpabilidad en el código penal Guatemalteco”*, (Tesis) Universidad de San Carlos de Guatemala.
- Rivera, D. (2016). *“Desempeño de la Policía Nacional del Perú en el conflicto socio ambiental en Pichanaki durante el año 2014”*, (Tesis) Pontificia Universidad Católica del Perú
- Ruiz, S. (2015). *“Detención Policial y Uso de la Fuerza: Implicaciones Jurídico-Criminológicas”*, (Tesis) Universidad de Murcia.
- Saavedra, R. (2013). *“Aplicación del Estado de necesidad Justificante y Exculpante Como Fundamento Eximente de la Responsabilidad Penal”*, (Tesis) Universidad José Faustino Sánchez Carrión.
- San Martín, C. (2014). *“Derecho procesal penal”*, t. ii, Lima: Grijley, p. 780.
- San Martín, C. (2014). *“Derecho procesal penal”*, t. ii, Lima: Grijley,
- Tribunal Constitucional, (2014). Expediente N.º 731-2004-HC/TC, Lima: 16 de abril del, f. j. n.º 4.
- Tribunal Constitucional, (2018). Expediente N.º 04780-2017-PHC/TC y Expediente N.º 00502-2018-PHC/TC (acumulado) Piura, Lima: Véase al respecto el f. j. n.º 108.
- Ugaz, J. (2019). *“La eximente de “obediencia debida” en el Derecho Penal peruano”*, (Tesis) Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Villavicencio, F. (2006). *“Derecho penal. Parte general”*, Lima: Grijley.

- Yvancovich, B. (2017). *“Participación en una autopuesta en peligro y heteropuesta en peligro consentida ¿Tiene responsabilidad penal el tercero productor de un riesgo?”*, (Tesis) Pontificia Universidad Católica del Perú.
- Zaffaroni, E. (1987). *“Tratado de derecho penal. Parte general”*, t. ii, Buenos Aires: Ediar, p. 277 y ss.
- Zaffaroni, E. (1987). *“Tratado de derecho penal. Parte general”*, t. ii, Buenos Aires: Ediar.

# **ANEXO**

## ANEXIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL USO DE LA FUERZA A TRAVÉS DEL MANEJO DEL ARMA DE FUEGO EN EL ACCIONAR POLICIAL.

Marque con un aspa la respuesta que considera correcta, teniendo en cuenta que:  
 TD: totalmente desacuerdo D: desacuerdo NA/ND: ni de acuerdo, ni en desacuerdo A: de acuerdo TA: totalmente de acuerdo

Nº	PREGUNTA	TD	D	NAA/ND	A	TA
1	¿Considera usted que el accionar policial es eficaz para el control interno del país?					
2	¿Considera usted que el uso de armas de fuego se aplica correctamente en las intervenciones policiales?					
3	¿Considera usted que al policía no se le debe de eximir de responsabilidad de responsabilidad penal cuando utiliza su arma de fuego en cumplimiento de su deber?					
4	¿Considera que la actuación policial debe es siempre legítimo y justificado?					
5	¿Cree usted que la causa principal para eximir de responsabilidad penal al efectivo policial es la legítima defensa?					
6	¿Considera usted que la prisión preventiva impuesta a los efectivos policiales cuando utilizan arma de fuego en cumplimiento de su deber es de acorde a derecho?					
7	¿Cree usted que la interposición de la prisión preventiva vulnera el derecho a la libertad personal del efectivo policial?					
8	¿Considera usted que la prisión preventiva viola los derechos fundamentales de los miembros de la Policía Nacional del Perú?					
9	¿Cree usted que se debe derogar la eximente de responsabilidad penal que protege a la Policía Nacional del Perú cuando utiliza su arma de fuego en el cumplimiento de su deber?					
10	¿Cree usted que el uso de la fuerza en las intervenciones policiales vulnera derechos fundamentales de las personas?					